



AMPARO EN REVISION 1885/84  
DARIO GONZALEZ CORONA

MINISTRO PONENTE: ULISES SCHMILL ORDOÑEZ  
Secretaria: Lic. Martha Moyao Núñez.

México, Distrito Federal.- Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de enero de mil novecientos ochenta y siete.

Vo. Bo.

VISTOS Y;

RESULTANDO

Ponente:

Primero.- Por escrito presentado el tres de mayo de mil novecientos ochenta y tres ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Hermosillo, Dario González Corona, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se especifican: "1.- H. Congreso de la Unión. - - -  
"- 2.- C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. - - - 3.- C. Secretario de Hacienda y Crédito Público. - - - 4.- C. Secretario de Gobernación. - - -  
"- 5.- C. Director de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en el Edificio marcado con el número 14 de la calle Ródano, Colonia Cuauhtémoc, México 5, D.F. - - -  
"- 6.- C. Gerente General de la División Noroeste de la citada Comisión Federal de Electricidad, con residencia en el Edificio localizado en la esquina de las calles Juárez y San Luis Potosí, de esa ciudad de Hermosillo, Sonora. - - -  
"- 7.- C. Superintendente de zona, adscrito a ciudad Obregón, Son., dependiente de la misma Comisión Federal de Elec

A. R. 1885/84

"tricidad, con residencia en la esquina de las calles 5 de --  
"Febrero y Guerrero, en esta población. - - - - - Actos Re--  
"clamados. - - - - - a).- Del Congreso de la Unión, se recla--  
"ma: 1.- La discusión, aprobación, decreto y expedición de  
"la "Ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas  
"disposiciones fiscales", de fecha 28 de diciembre de 1982, --  
"publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de --  
"diciembre del mismo año y particularmente su artículo Trige--  
"simo Segundo Transitorio. - - - - - 2.- La discusión, apro--  
"bación, decreto y expedición del artículo 18 de la Ley del  
"Impuesto al Valor Agregado en vigor, y - - - - - 3.- Final--  
"mente la autorización otorgada a la Comisión Federal de --  
"Electricidad, para efectuar a través de su personal, el co--  
"bro de los impuestos referidos por consumo de energía eléc--  
"trica, y lo que se traduce en el acto concreto de la apli--  
"cación de las leyes que se impugnan. - - - - - b).- Del pre--  
"sidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se  
"reclaman: 1.- La firma, promulgación y publicación en el --  
"Diario Oficial de la Federación, tanto de la Ley que esta--  
"blece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones --  
"fiscales, de fecha 28 de diciembre de 1982, como del artícu--  
"lo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. - - - - -  
" 2.- La omisión del veto de que está investido y que le per--  
"mita rechazar dichas leyes anticonstitucionales en los ac--  
"tos de su remisión por el Congreso, permitiendo en cambio su  
"vigencia. - - - - - 3.- La consumación de todos aquellos --  
"actos presentes o futuros encaminados a proveer a la obser--  
"vancia de tales leyes en la esfera administrativa. - - - - -  
"- - c).- Del secretario de Hacienda y Crédito Público y de



México, D.F.

FORMA 10

3

A. R. 1885/84

"Gobernación, se reclaman la firma, refrendo y publicación, -  
"tanto de la Ley que establece, reforma, adiciona y deroga  
"diversas disposiciones fiscales, de fecha 28 de diciembre -  
"de 1982, como de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en  
"su artículo 18. - - - - d).- Particularmente del Secreta-  
"rio de Hacienda y Crédito Público se reclaman también los -  
"inminentes actos materiales de ejecución de las leyes cita-  
"das, y consistentes en la concentración y aprovechamiento -  
"de los impuestos percibidos por las recaudadoras y los de -  
"su ejecución coactiva o de imposición de sanciones que pro-  
"ceda por falta de cumplimiento del causante, en su caso. --  
"D. ACUERDOS. - - - e).- Del Director, Gerente General de la División Nor-  
"oeste con asiento en Hermosillo, y superintendente de zona,  
"adscrito a ciudad Obregón, Sonora, de la Comisión Federal -  
"de Electricidad, se reclaman. - - - - a).- Los primeros -  
"actos de ejecución y aplicación de las mencionadas leyes an-  
"ticonstitucionales y tendientes dentro de sus respectivas -  
"esferas de atribuciones, al cobro que se formula al suscrito  
"por el periodo de diciembre 21 a febrero 20 de 1983 y con  
"importe de \$ 141.41 por concepto de impuestos, sobre pro-  
"ducción y servicios y al valor agregado, causados por la --  
"prestación del servicio de energía eléctrica que consumo. --  
" - - - - b).- Los sucesivos cobros que por el mismo con-  
"cepto se sigan exigiendo, al suscrito en el futuro. - - - -  
" - c).- La recaudación, concentración, custodia y remesa a  
"la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los fondos  
"provenientes del pago de los impuestos establecidos por las  
"leyes anticonstitucionales mencionadas; así como las futuras  
"recaudaciones, custodias, concentraciones y remesas que ha-

A. R. 1885/84

"yan de hacerse periódicamente de las percepciones por el pago de los multireferidos impuestos. - - - - d).- De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, - reclamo los efectos y consecuencias que de hecho y de derecho le resulten al suscrito, como actos concretos de aplicación de las leyes que se impugnan".

Segundo.- Se señalan como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 31, fracción IV de ese ordenamiento.

El quejoso narró los siguientes antecedentes:

"A).- El suscrito, como usuario del servicio de suministro de energía eléctrica, he venido pagando puntualmente y en forma periódica a la Comisión Federal de Electricidad, el importe por consumo de energía eléctrica, de acuerdo con la tarifa que me fue marcada, en términos del anexo - que se acompaña como No. 1, y que desde ahora ofrezco como prueba de mi parte." - - - - B).- En el aviso de cobro por consumo de luz eléctrica, que la Comisión Federal de Electricidad me envió por el período pasado, comprendido diciembre 21 a febrero 20 de 1983, y que se acompaña como anexo - No. 1, se consigna el cobro de una cantidad exorbitante extraordinariamente superior a la que periódicamente se me venía cobrando. - - - - C).- Del análisis del referido aviso de cobro, se llega al conocimiento de que además del importe de la luz eléctrica consumida dentro de dicho período de tiempo, la Comisión Federal de Electricidad, me cobra también lo correspondiente al impuesto sobre producción y servicios y al impuesto al valor agregado, en aplicación de las





A. R. 1865/84

"respectivas leyes anticonstitucionales que se reclaman de las  
"responsables. - - - - - D).- Ahora bien, al estimar que el -  
"cobro de los impuestos aludidos es anticonstitucional y vio-  
"latorio de garantías individuales en mi perjuicio, O C U R R O  
" ante su Señoría, en demanda de amparo y protección de la --  
"justicia federal por las leyes y el primer acto concreto de -  
"aplicación en mi contra y que reclamo de las responsables, -  
"precisamente en el momento en que la Comisión Federal de - -  
"Electricidad, como encargada de su recaudación, pretende el  
"cobro y para evitar el corte de suministro de energía eléc--  
"trica."

CIA  
EN  
RDOS

Como conceptos de violación se expresaron los si-  
guientes: "PRIMERO.- La "Ley que establece, reforma, adicio-  
"na y deroga diversas disposiciones fiscales", publicada en -  
"el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1982, viola los ar-  
"tículos 31, fracción IV, 74, fracción IV, 73 fracciones VII y  
"XXIX, de la Constitución General de la República y en conse-  
"cuencia viola garantías individuales que instituyen en -  
"mi favor los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. - - - - -  
" En efecto, en términos del artículo 31 fracción IV de la -  
"Constitución General, es obligación de los mexicanos contri-  
"buir para los gastos públicos, de manera proporcional y equi-  
"tativa en la forma que establezcan las leyes; de las cuales  
"se fijan por el Congreso de la Unión para sufragar el gasto  
"público conforme lo establece el artículo 74 fracción IV de  
"la Constitución.- - - - - Por su parte, el artículo 73 frag-  
"ción VII de la Constitución General, reserva como facultad -  
"del Congreso la imposición de contribuciones para cubrir el  
"presupuesto y la fracción XXIX del numeral en cita concede -  
"facultad para establecer contribuciones sobre energía eléc-

A. R. 1885/84

"trica. - - - - La forma como se cumple con las facultades y  
 "obligaciones que para las autoridades y contribuyentes esta--  
 "blecen las señaladas disposiciones, es a través de la Ley de  
 "Ingresos de la Federación, que tiene una vigencia anual y en  
 "la que se enumeran los conceptos o rubros que por ingresos -  
 "percibirá la Federación.- Así la Ley de Ingresos de la Fede  
 "ración es el instrumento en que se establecen y señalan cada  
 "una de las contribuciones necesarias para cubrir el presupues  
 "to, y para el año de 1983 se publicó en el Diario Oficial  
 "de la Federación de fecha 31 de diciembre de 1982; por lo --  
 "mismo las autoridades sólo podrán cobrar las contribuciones -  
 "que expresamente señala la Ley de Ingresos de la Federación,  
 "y de acuerdo a las situaciones jurídicas previstas por las -  
 "leyes fiscales respectivas. - - - - Ahora bien, según cons  
 "ta del aviso de cobro de suministro de energía eléctrica ex  
 "hibido por el último período comprendido diciembre 21 a fe  
 "brero 20 de 1983, aparece que se cobra al suscrito en forma  
 "indirecta a través de las oficinas locales de la Comisión -  
 "Federal de Electricidad, la cantidad que en el mismo se con  
 "signa, por impuestos sobre producción y servicios que de nin  
 "guna manera reúne los requisitos que exigen los invocados pre  
 "ceptos constitucionales. - - - - Se afirma, que se cobra -  
 "en forma indebida, al suscrito, el impuesto sobre producción  
 "y servicios, porque si bien es cierto, que la Ley de Ingre--  
 "sos de la Federación para 1983, incluye tal impuesto como --  
 "ingreso; también es verdad, que el texto de la Ley del Impue  
 "to Especial sobre producción y servicios, PARTICULARMENTE EL  
 "ARTICULO PRIMERO, FRACCION SEGUNDA, señala que sólo están -  
 "obligados a pagarlo las personas que realicen las prestacio



FORMA 111

A. R. 1885/84

"nes de servicios señaladas en la misma Ley, la que en sus --  
"artículos 17 y 18 ciertamente no contemplan la prestación --  
"del servicio de energía eléctrica. En esta suerte si la Ley  
"del Impuesto Sobre Producción y Servicios, no contempla co-  
"mo objeto del impuesto la prestación del servicio de energía  
" eléctrica, ninguna autoridad podrá cobrar <sup>A</sup> el impuesto, y <sup>1</sup>  
"menos aún por un intermediario autorizado, el cual en la --  
"especie es la Comisión Federal de Electricidad; máxime que,  
"de acuerdo con la Ley en cita, de su exposición de motivos -  
"aparece que tratándose de prestación de servicios se deter-  
"minarán los impuestos casuísticamente, y en los casos expre-  
"samente previstos se encuentran tipificadas el servicio te-  
"lefónico y seguros; mas nunca el servicio por energía eléc-  
"trica; por lo que además se viola el artículo 5o. del Cód-  
"igo Fiscal de la Federación; pues las disposiciones fiscales  
"en cuanto a su objeto son de aplicación estricta, y por tan-  
"to no se puede aplicar ningún impuesto si su objeto no está  
"establecido expresamente por la Ley; más aún el artículo 1o.  
"del Código citado, en su último párrafo señala que las per-  
"sonas únicamente tendrán las obligaciones que establezcan -  
"en <sup>S</sup> forma expresa las Leyes Fiscales. - - - - En síntesis,  
"el cargo por impuesto sobre producción y servicios que con-  
"templa el recibo que anexo como número tres, no está contem-  
"plado en la propia Ley de la Materia y por ende el cobro --  
"infringe los dispositivos constitucionales invocados, ade--  
"más del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, y  
"por lo mismo las garantías individuales establecidas por --  
"los artículos 14 y 16 de la Constitución. - - - - SEGUNDO.  
" Las autoridades responsables, al parecer pretenden apoyar

A. R. 1885/84

"se para el cobro indirecto de los impuestos impugnados en --  
"la determinación del artículo trigésimo segundo transitorio  
"de la "Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diver-  
"sas Disposiciones Fiscales", publicada en el Diario Oficial  
"del 31 de diciembre de 1982, y con ello se produce un con--  
"cepto de violación más, por tan anticonstitucional proceder.  
" - - - - - Como ya qued<sup>o</sup> establecido, es sólo a través de -  
"la Ley de Ingresos de la Federación que a los particulares  
"se les podrá exigir su contribución al gasto público y por-  
"los conceptos o rubros que la propia Ley citada consigna, --  
"en la especie, para 1983, y en tal sentido es que el artícu-  
"lo 1o. del Código Fiscal en vigor también los consigna. - -  
"- - - Ahora bien, de la lectura de la Ley de Ingresos de la  
"Federación para el Ejercicio Fiscal de 1983, se advierte --  
"que de ninguna forma se contempla como fuente de ingresos -  
"la denominada "Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Dero-  
"ga Diversas Disposiciones Fiscales". Esta Ley publicada en  
"el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de --  
"1982, no está incluida en ninguno de los nuevos rubros que-  
"contempla la Ley de Ingresos como fuente de contribuciones,  
"de aquí que indebidamente puede la autoridad pretender así  
"legitimar su conducta, y si ello hace, incurre en las vio-  
"laciones constitucionales que por esta vía se reclaman. - -  
"- - - Al respecto, debe señalarse que la multicitada Ley -  
"que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposi-  
"ciones Fiscales, constituye formalmente hablando una Ley, --  
"que consta de su propia exposición de motivos, sus textos -  
"consignados en artículos transitorios; esto es, un disposi-  
"tivo legal en forma, que a pesar de todo ello, no se encuen





FORMA 112

A. R. 1885/84

"tra contemplada como tal en la Ley de Ingresos de la Fed--  
"ración y por lo mismo no puede ser base para el cobro de un  
"impuesto o contribución como ya quedó señalado. - - - - -  
" TERCERO.- En la hipótesis jamás admitida, de que pueda -  
"cobrarse un impuesto con fundamento en una Ley no considerada  
"da como fuente de ingresos, aún así dicha Ley es anticons--  
"titucional y no puede servir de apoyo, como se pretende, --  
"para el cobro de Impuesto Sobre Producción y Servicios en -  
"el servicio de energía eléctrica. - - - De acuerdo al -  
"proceso legislativo previsto por el artículo 72 fracción -  
"F) de la Constitución, en la reforma a las leyes se observa  
"rán los mismos trámites que se establecen para su formación.  
" En consecuencia, si el legislador pretendió para 1983 re-  
"formar la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Ser-  
"vicios para incluir el servicio eléctrico, debió seguir el  
"mismo procedimiento previsto para su elaboración; esto es,  
"debió existir una iniciativa de reformas a la Ley de Produc-  
"ción y Servicios, señalar los preceptos que pretendía re-  
"formar, adicionar o derogar en su caso, mas no debió expe-  
"dir una "Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Di-  
"versas Disposiciones Fiscales; o dicho de otra forma, con -  
"esta nueva Ley no se puede adicionar la producción y servi-  
"cios, y si en la especie es lo que sucede, se violan los -  
"dispositivos constitucionales invocados, lo que justifica  
"el juicio de garantías que se promueve. - - - - - CUARTO.-  
"Suponiendo sin conceder que fuere permitido reformar una -  
"Ley en la forma que presuntamente pretenden las responsa--  
"bles aún en esa hipótesis jamás admitida, tal proceder re-  
"sulta anticonstitucional, como es el caso. - - - - - Como

A. R. 1885/84

"anteriormente se manifestó el artículo 1o. de la Ley del Im-  
"puesto Especial Sobre Producción y Servicios, estipula que  
"son objeto de dichos impuestos la prestación de servicios -  
"señalados en la propia Ley, la que en su artículo 17 formal-  
"mente y de manera expresa únicamente incluye como objeto del  
"impuesto a los servicios de seguros y telefónicos, de mane-  
"ra que sólo y estrictamente por estos servicios es que se -  
"podrá cobrar el impuesto o estudio, y como no se contempla  
"como objeto del gravamen el servicio de energía eléctrica,  
"la autoridad no puede pretender como en la especie, el co-  
"bro que intenta, ni aún en el supuesto jamás admitido de --  
"que ello sea a través de la "Ley que Establece, Reforma, --  
"Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales". - - - -  
" - En efecto, entre los artículos reformados y adicionados  
"por este último dispositivo legal y que entre otros, fueron  
"el 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 7o., 8o., 13, 17, etc., de la -  
"Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en  
"ninguno de ellos se introduce o adiciona de manera expresa  
"como objeto del gravamen la prestación del servicio de ener-  
"gía eléctrica, lo que evidencia la anticonstitucionalidad -  
"que se alega, pues es en el artículo trigésimo segundo tra-  
"sitorio que se contempla el gravamen y no en el texto prin-  
"cipal de la "Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga-  
"Diversas Disposiciones Fiscales." - - - - QUINTO.- El --  
"hecho de que el gravamen a la prestación del servicio de --  
"energía eléctrica, aparezca en el multicitado artículo tri-  
"gésimo segundo transitorio, de ninguna forma purga el vicio  
"de anticonstitucionalidad de la Ley y su aplicación. Un ar-  
"tículo transitorio no sobrepasa la Ley, ni la condiciona y



2881  
"menos referida a un cuerpo legal del que ni siquiera es pro-  
"pio transitorio. Si el Legislador pretendía gravar el servi-  
"cio de energía eléctrica como se reitera, debió introducir -  
"tal gravamen en los artículos 17 y 18 de la Ley del Impuesto  
"Especial Sobre Producción y Servicios para cumplir con lo or-  
"denado en su propio artículo 1o., y exposición de motivos, -  
"pues es en forma casuística que se deberán gravar los servi-  
"cios; y del análisis de la cuestión, aparece un transito-  
"rio de una Ley secundaria, modificaría el proceso formal le-  
"gislativo prevenido en el artículo 72 inciso f) de la Cons-  
"titución de la República, lo cual es inadmisibles, so pena de  
"incurrir como en el caso que se analiza, en las anticonsti-  
"tucionalidades que se alegan. - - - - - SEXTO.- Por otro  
"lado, el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agrega-  
"do y que por este juicio se combate, resulta violatorio de  
"los dispositivos constitucionales señalados en esta demanda  
"de garantías, porque si bien es cierto que tales artículos -  
"constitucionales permiten imponer a los gobernados impuestos  
"para obtener los ingresos para satisfacer el presupuesto de  
"egresos, también es cierto, que los impuestos establecidos  
"deben guardar ciertos elementos constitutivos, como lo re-  
"conoce el artículo 5o., del Código Fiscal de la Federación,  
"la doctrina fiscal y la Jurisprudencia, siendo tales elemen-  
"tos el sujeto, el objeto, base y tasa o tarifa. - - - - -  
" La base del impuesto es la unidad contributiva, o sea, lo  
"que se toma como medida para pagar el impuesto y sobre la -  
"que se aplica la tarifa. En el caso del Impuesto al Valor  
"Agregado, la base del impuesto es el valor de los bienes o  
"servicios prestados, como lo admite su exposición de motivos

"y sus artículos 1o., 2o., y 3o., que lo confirman, y a ta--  
 "les bases se aplican las tarifas que son del 0%, 6%, 15% o -  
 " 20%. - - - - - Atento a lo anterior y tomando en cuenta -  
 "el concepto de base del impuesto como aparece en la Ley --  
 "del Impuesto al Valor Agregado, resulta contrario a la Cong  
 "titución General el contenido del artículo 18 que se impug-  
 "na, pues considera como valor del servicio para el cálculo  
 "del impuesto, no sólo el que en sí mismo tiene el servicio,  
 "sino que incluye como base los valores de las cantidades  
 "que se carguen por concepto de impuestos. En el caso con-  
 "creto, el impuesto al valor agregado no toma como base úni-  
 "camente el consumo de energía eléctrica, sino que al valor-  
 "de dicho consumo, adicionado con el Impuesto Especial Sobre  
 "Producción y Servicios le carga el IVA, por lo que se incu-  
 "rre en la anticonstitucionalidad reclamada, pues de hecho -  
 "se cobra un impuesto sobre otro impuesto, lo que es inadmi-  
 "sible. Es decir, ya no es la base del impuesto al valor --  
 "agregado el importe del servicio, sino tal servicio más el  
 "impuesto sobre producción y servicios, de suerte que existe  
 "no una tributación concurrente, sino una doble tributación  
 "superpuesta, perdiéndose así, la naturaleza de uno de los -  
 "elementos que configuran los impuestos, cuál es la base. -  
 " - - - - Al respecto debe señalarse que la Constitución -  
 "General en ningún momento permite a las autoridades super-  
 "poner impuestos, porque si bien es cierto que permite la -  
 "tributación concurrente, debe entenderse que siempre es -  
 "con respeto a los propios elementos constitutivos de cada  
 "impuesto, y nunca entremezclándolos, como pretende ahora -  
 "la responsable, pues de ser así se pierden los elementos -





A. R. 1885/84

"autónomos e independientes de cada impuesto. En la especie  
"y como aparece del recibo de cobro que se exhibe como anexo  
"No. cuatro, es claro que las responsables vía Comisión Fede-  
"ral de Electricidad, cobran el impuesto al valor agregado en  
"base a la tarifa o importe del consumo de energía adicionado  
"con el impuesto especial sobre producción y servicios; esto-  
"es, cobran un impuesto de otro impuesto, incurriéndose en la  
"violación constitucional que se alega respecto al señalado -  
"artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. - - - -  
"SEPTIMO.- El cobro del impuesto sobre producción y ser-  
"vicios que indebidamente se cobra a mi representada por el -  
"Fisco a través de la Oficina Local de la Comisión Federal de  
"Electricidad, conjuntamente con el cobro del impuesto al va-  
"lor agregado que se calcula tomando como base otro impuesto,  
"resulta conculcatorio del artículo 31 fracción IV de la Cons-  
"titución General de la República, pues el peso por kilowatt-  
"hora que como impuesto sobre producción y servicios estable-  
"ce el multicitado artículo trigésimo segundo transitorio de-  
"la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas -  
"Disposiciones Fiscales", es manifiestamente, falto de propor-  
"cionalidad y equidad. - - - - El impuesto conjuntado y --  
"superpuesto de producción y servicios y al valor agregado, -  
"es desproporcionado y falto de equidad, y en el caso es exor-  
"bitante y ruinoso, en razón de que según aparece del recibo  
"correspondiente, los impuestos superpuestos ascienden que -  
"si no sobrepasan a la propia cantidad que pago por concepto  
"de energía eléctrica, lo que ya de suyo convierte en inequi-  
"tativos los acumulados impuestos. - - - - Si además se --  
"compara el importe cubierto por el servicio de energía por -

A. R. 1885/84

"el período anterior, con el que ahora pretenden las responsa-  
bles vía Comisión Federal de Electricidad, se advierte que -  
"el monto de los impuestos que ahora se pretenden cobrar, se  
"elevan en mucho más de un cien por ciento, lo que también -  
"convierte tal elevación de impuestos en una carga despropor-  
"cionada e inequitativa. - - - - - Específicamente, la canti-  
"dad que en el caso concreto se pretende cobrar por impues-  
"tos, se nota que son ruinosos tanto el de producción y ser-  
"vicios como el que se acumula de impuesto al valor agregado,  
"pues la cantidad mensual que se intenta cobrar, prácticamen-  
"te ocasionará el cierre de la actividad, porque como en su -  
"momento lo acreditaré con la prueba pericial respectiva los  
"importes por el sólo concepto de servicio de energía eléc-  
"trica como lo pretenden las responsables, afectan de tal ma-  
"nera los costos, los precios de los productos elaborados, -  
"en fin, la carga fiscal que se impugna; repito, como lo acre-  
"ditaré en su oportunidad, resulta de tal manera onerosa, que  
"se configura la falta de proporcionalidad y equidad que pre-  
"viene el ahora violado artículo 31, fracción IV de la Cons-  
"titución General de la República. - - - - - OCTAVO.- Otra -  
"violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, la oca-  
"sionan las autoridades responsables cuando delegan en la --  
"Comisión Federal de Electricidad, el cobro de los impuestos  
"que ahora se impugnan, porque siendo como es que tal orga-  
"nismo no reúne las características de autoridad le delegan -  
"la liquidación previa cuantificación de los impuestos que -  
"se reclaman. Ello deja a mi representada en un total esta-  
"do de indefensión, pues puede sufrir error o equivocación, -  
"y sin embargo por delegación de las ahora responsables, se



"dota a la Comisión Federal de Electricidad de facultades co-  
"accionadoras, pues en su caso amaga con cortes de luz en la  
"hipótesis, lo que se convierte en una privación de derechos  
"y una molestia para el particular, sin que exista mandamien-  
"to escrito de autoridad competente, lo que configura el --  
"concepto de violación que se supone. - - - En conclusión  
"es evidente que los actos reclamados a las diversas autori-  
"dades responsables, constituyen un acto de privación de dere-  
"chos, sin que exista juicio seguido ante los Tribunales pre-  
"viamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades  
"esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedi-  
"das con anterioridad al hecho, así mismo son un acto de mo-  
"lestia sin que exista mandamiento escrito de autoridad com-  
"petente, que funde y motive la causa legal del procedimien-  
"to, resultando por tanto conculcadas las garantías que en -  
"mi favor, previenen los artículos 14 y 16 Constitucionales."

Tercero.- El juez del conocimiento, admitió la -  
demanda de garantías, la que se registró con el número 1063/83  
y, seguidos los trámites legales respectivos, dictó sentencia  
con fecha ocho de agosto de mil novecientos ochenta y tres -  
la que terminó de engrosarse el dieciséis de enero de mil --  
novecientos ochenta y cuatro, que concluyó con el siguiente  
punto resolutivo: "UNICO:- La Justicia de la Unión AMPARA Y  
"PROTEGE a DARIO GONZALEZ CORONA, CONTRA LOS ACTOS RECLAMADOS  
"DEL CONGRESO DE LA UNION, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS  
"ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO  
"PUBLICO, SECRETARIO DE GOBERNACION, DIRECTOR DE LA COMISION  
"FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TODOS con residencia en México, D.  
"F., SUPERINTENDENTE DE ZONA dependiente de la Comisión Fe-

A. R. 1885/84

"deral de Electricidad, con domicilio en Ciudad Obregón, Sonora, y GERENTE GENERAL DE LA DIVISION NOROESTE de la Comisión Federal de Electricidad, de esta ciudad."

Las consideraciones en que se apoya el juzgador para fallar en el sentido en que lo hace, son las siguientes:

"I.- Resultan ciertos los actos reclamados por la parte quejosa, toda vez que por lo que hace a la discusión, aprobación y expedición de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, en concreto, su artículo 32º transitorio, así por lo que toca a la discusión, aprobación y expedición del artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, su existencia queda acreditada conforme a lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo autoriza ésta en su artículo 2º, toda vez que tales disposiciones reclamadas, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos; asimismo, y en lo concerniente a la aplicación de las anteriores disposiciones, que se proyecta a través del cobro al impuesto sobre producción y servicios sobre el servicio de energía eléctrica y el impuesto al valor agregado sobre el mismo servicio, que las autoridades ejecutoras realizan por conducto de la Comisión Federal de Electricidad, tal aplicación es de considerarse acreditada a través de los recibos de pago de consumo de energía eléctrica que la parte quejosa exhibió con su demanda de garantías, mismos a los que por no haber sido objetados procede darles valor probatorio pleno, de acuerdo con lo previs-





A. R. 1885/84

"to por el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos -  
"Civiles, a cuya aplicación supletoria se aludió con anteriori-  
"dad. - - - - II.- Previo al estudio de los conceptos de vio-  
"lación que esgrime la parte quejosa, procede entrar a anali-  
"zar las causales de improcedencia que invocan las autoridades  
"responsables, por estar relacionado tal análisis con una - -  
"cuestión de orden público, según lo establecido en la Juris-  
"prudencia que como Común al Pleno y a las Salas aparece pu-  
"blicada bajo el número 109 del Apéndice al Semanario Judicial  
"de la Federación, relativo a los años de 1917-1975. - - - -  
"En efecto, procede considerar infundada la petición de so-  
"breseimiento que del presente juicio de garantías solicitan  
"el C. Presidente de la República y el C. Secretario de Ha-  
"cienda y Crédito Público, argumentando la inexistencia res-  
"pecto de ellos, de los actos de aplicación de las disposicio-  
"nes reclamadas, toda vez que como se señaló en el consideran-  
"do I, el permitir la aplicación de dichos normativos se com-  
"prueba con la intervención que tuvieron, respectivamente, en  
"el referendo, promulgación y publicación de los mismos. - - -  
"- De igual manera infundada se aprecia la causal de impro-  
"cedencia que hace valer el Subsecretario de Inspección Fis-  
"cal en el informe justificado que rindió en representación  
"del C. Presidente de la República y del Secretario de Hacien-  
"da y Crédito Público, relativa a que por falta de interés -  
"jurídico la parte quejosa carece de legitimación para promo-  
"ver el presente juicio de garantías, ya que de manera contra-  
"ria a esta aseveración, en el caso basta considerar que se -  
"reclama la mecánica legal provocadora del cobro de un impues-  
"to y que dicho cobro afecta directamente el patrimonio de la



SECRETARÍA

A. R. 1885/84

"quejosa, para considerar que dicha afectación no resulta me-  
"ramente patrimonial sino también jurídica, desde el momento  
"en que la propia Ley establece tal situación de afectación,-  
"lo anterior resulta así, no obstante que las disposiciones re-  
"clamadas establezcan que los contribuyentes del impuesto cu-  
"yo cobro también se reclama, son las personas físicas y las  
"morales que prestan los servicios de energía eléctrica, pues  
"como las propias responsables lo reconocen, aún cuando sea la  
"Comisión Federal de Electricidad a quien se señala como cau-  
"sante directo del impuesto, es claro que dicha institución -  
"traslada el cobro del mismo a los usuarios del servicio de -  
"energía eléctrica y dicha traslación se encuentra prevista -  
"precisamente en las disposiciones cuya constitucionalidad se  
"cuestiona, por lo que, se insiste, la afectación al patrimo-  
"nio de los usuarios no deriva de una situación de hecho sino  
"del derecho mismo, siendo de señalarse que estimar lo contra-  
"rio equivaldría a permitir que a través de la figura fiscal -  
"de la traslación del cobro de los impuestos, el Estado asu-  
"miera el poder ilimitado de disponer del patrimonio de los -  
"gobernados sin que para ello, éstos tuvieran acceso al control  
"constitucional de una actitud así como lo es, en nuestro sis-  
"tema, el Juicio de Amparo. - - - - - Igualmente resulta in-  
"fundada la improcedencia que invocan las mismas autoridades  
"señaladas en el punto antes tratado, por cuanto a que ale-  
"gan que el acto de traslación que el contribuyente directo -  
"(Comisión Federal de Electricidad) realiza a diversa perso-  
"na (usuarios del servicio de energía eléctrica), no es un -  
"acto de autoridad, sino se trata de un acto emanado de un -  
"particular. Es desacertado el argumento de cuenta, toda --



A. R. 1885/84

vez que si bien es cierto que en el caso de traslación del -  
cobro de impuesto, en concreto en el caso que nos ocupa, es  
una persona moral particular quien ejecuta dicha traslación  
a los usuarios del servicio que presta, no menos cierto re-  
sulta que tal conducta implica un mero acto de ejecución de  
las disposiciones legales que prevé tal traslación, actuan-  
do el contribuyente directo como un mero instrumento de las  
autoridades exactoras para lograr el cobro del impuesto su-  
jeto a dicha mecánica, por lo que la actuación del particu-  
lar que traslada, por accesoria, no desvirtúa la naturaleza  
de acto de autoridad que reviste la facultad pública de --  
exacción a la que instrumenta. - - - - Con base en los -  
razonamientos del suscrito vertidos con anterioridad, a los  
que procede remitir en obvio de repeticiones, es de dese-  
timarse la causal de sobreseimiento que se hace valer ale-  
gando que las "argumentaciones" que vierte la parte quejosa  
no son atendibles por exponer opiniones subjetivas que no -  
precisan ni demuestran en qué consiste el perjuicio jurídi-  
co que las disposiciones reclamadas le ocasionan, siendo --  
también de desecharse la causal de improcedencia a que se -  
refiere el punto seis del capítulo de sobreseimiento que --  
aparece en el informe justificado que se analiza, pues de -  
manera contraria a como en él se alega y según quedó ya es-  
tablecido en este considerando, es manifiesto el interés --  
jurídico de la parte quejosa para plantear este juicio de -  
amparo. - - - - Por último, también ineficaz resulta el  
argumento de extemporaneidad del planteamiento de la deman-  
da de amparo, toda vez que de manera contraria a como lo --  
alegan las autoridades exponentes, al no ser autoaplicativas

A. R. 1885/84

"las disposiciones legales que se reclaman, ello conlleva a  
"establecer que no operó en contra de la quejosa la aplica-  
"ción del término previsto en la fracción I del artículo 22  
"de la Ley de Amparo, relativo a la necesidad de promover -  
"el juicio de garantías dentro del término de treinta días-  
"siguientes a la fecha en que surte efectos la publicación-  
"de la ley reclamada, ya que en el caso el término a consi-  
"derar aplicable es el de quince días a que alude el artícu-  
"lo 21 de la misma Ley de Amparo, computable a partir del -  
"primer acto de aplicación de las normas reclamadas, cabien-  
"do relacionar lo anterior con la aclaración contenida en -  
"el párrafo segundo de la fracción XII del artículo 73 de -  
"la Ley de Amparo, que señala que no se entenderá consenti-  
"da tácitamente una Ley, a pesar que siendo impugnabile en -  
"amparo desde el momento de su promulgación, en los térmi-  
"nos de la fracción VI de ese artículo no se haya reclamado,  
"sino sólo en el caso de que tampoco se haya interpuesto am-  
"paro contra el primer acto de su aplicación en relación -  
"con el quejoso. - - - - III.- Entrando al estudio de los-  
"conceptos de violación resultan fundados los que endereza-  
"la parte quejosa a combatir la constitucionalidad del artí-  
"culo 329 transitorio de la Ley que Establece, Reforma, Adi-  
"cional y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada-  
"en el Diario Oficial del treinta y uno de Diciembre de mil  
"novecientos ochenta y dos y que señala un impuesto especial  
"sobre Producción y Servicios durante el año de 1983, sobre  
"la prestación de energía eléctrica. - - - - Se afirma lo  
"anterior en virtud de que, como la parte quejosa sostiene,  
"el impuesto antes referido no se encuentra establecido en-





DE JUSTICIA  
CON  
DE ACUERDOS

"ningún ordenamiento que conforme a la Legislación fiscal -  
"nacional sea apto para encuadrarlo, pues tratándose de un -  
"impuesto vinculado a una materia específicamente regulada -  
"en una ley especial, como es la Ley del Impuesto Especial -  
"sobre Producción y Servicios, este ordenamiento no prevé -  
"que dentro de los servicios que deben ser objeto de tal im -  
"puesto, se incluya el relativo a la energía eléctrica, si -  
"no única y exclusivamente establece el cobro del impuesto -  
"respectivo por los servicios de teléfono y de seguros. - -  
"- - - No es obstáculo para afirmar anterior la circuns -  
"tancia de que el impuesto cuestionado aparezca previsto en  
"una norma legal emitida por el Congreso de la Unión confor -  
"me a la facultad que le otorga el inciso a) del apartado -  
"5º de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución -  
"General, ya que al establecer el artículo 31 fracción IV -  
"de la propia Constitución la obligación de los mexicanos -  
"de contribuir para los gastos públicos, exigiendo que las -  
"contribuciones estén previstas en la ley, debe entenderse -  
"que ante la existencia de una ley que de manera especial -  
"regule determinada materia por cuanto a su proyección fis -  
"cal, debe ser en ésta precisamente donde los gobernados -  
"estén en aptitud de conocer los impuestos que respecto de -  
"tales materias deben cubrir, a efecto de salvaguardar así  
"el debido medio legal de conocimiento de sus obligaciones,  
"mismo que en el caso se ve vulnerado, toda vez que el im -  
"puesto reclamado no solamente no aparece previsto en la -  
"ley especial correspondiente sino, incluso, quedó enmarca -  
"do dentro de una norma legal como es una "transitoria", -  
"que por su naturaleza no puede tener más alcance que el de

A. R. 1885/84

"establecer las bases para adecuar un ordenamiento legal de  
"nueva creación a la materia pretérita y futura con que --  
"se relacione, esto es, el impuesto sobre Producción y Ser-  
"vicios derivado de la prestación de servicio de energía - -  
"eléctrica, no aparece regulado, se insiste, en la ley del-  
"Impuesto especial sobre Producción y Servicios, ni aún si-  
"quiera en la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga  
"Diversas Disposiciones Fiscales, entre las que se encuen-  
"tra la propia ley mencionada en primer lugar, sino que de-  
"manera contraria a una debida técnica legislativa aparece-  
"que en el artículo 32º transitorio de la ley aludida se  
"segundo lugar, es donde se enmarcó la disposición fiscal sus-  
"tantiva cuya constitucionalidad se impugna, no obstante -  
"que, como ya antes precisó, la función de los artículos -  
"transitorios de una ley no es apta para enmarcar una dispo-  
"sición sustantiva como es la fijación de un impuesto, sino  
"únicamente sirve, se insiste también, para establecer la -  
"adecuación de la ley a la que adjetivamente pertenece, a -  
"las situaciones que relacionadas con la misma se hayan da-  
"do con anterioridad y se vayan a dar en el futuro. - - - -  
"En base a los anteriores razonamientos procede considerar-  
"inconstitucional el Impuesto sobre Producción y Servicios-  
"aplicado a la prestación de servicio de energía eléctrica-  
"y previsto a través del artículo transitorio antes mencio-  
"nado, resultando por consecuencia inconstitucional también  
"el cobro que de dicho impuesto se ha efectuado a la parte-  
"quejosa. - - - - De igual manera fundados resultan los -  
"conceptos de violación en que la parte quejosa sostiene la  
"inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley de Impuesto



A. R. 1885/84

"al Valor Agregado, por cuanto que establece, en lo condu--  
"cente, que para calcular el impuesto tratándose de presta--  
"ción de servicios se considerará como valor el total de la  
"contraprestación pactada, así como las cantidades que ade--  
"más se carguen o cobren a quien reciba el servicio por --  
"otros impuestos, y en base en esto se cobre al usuario de--  
"energía eléctrica el Impuesto al Valor Agregado tomando --  
"también como valor del servicio el impuesto sobre consumo--  
"de energía eléctrica. -- -- -- Se aprecia inconstitucional  
"el referido artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor --  
"Agregado, por cuanto a que autoriza que en la determina---  
"ción de dicho impuesto se incluya el diverso impuesto que--  
"por consumo de energía eléctrica cubra el usuario del ser--  
"vicio, ya que, en primer término, resulta manifiesto que --  
"una carga impositiva de ninguna manera representa incremen--  
"to en el valor de los bienes y servicios, por lo que permí--  
"tir que sirva de base para el cobro del Impuesto al Valor--  
"Agregado, no solamente viola el principio de proporcionali--  
"dad que debe regir la actividad impositiva del estado, si--  
"no que, además, desvirtúa la propia naturaleza del impues--  
"to en cuestión, desde el momento en que como el mismo lo--  
"proyecta en su denominación, no puede tener más base que --  
"el incremento de valor que los bienes y servicios adquire--  
"ran a través de las diferentes etapas de su vida económica,  
"iniciando con la producción y culminando con el consumo, --  
"incremento que, como ya se anotó, no se produce por las --  
"cargas impositivas que en tales etapas se exijan a las --  
"personas que las llevan a cabo, e incluso es de señalarse--  
"que autorizar el cobro de un impuesto sobre otro diverso --  
"una carga impositiva de ninguna manera representa incremen--

DE LOS  
AL. C. M.  
IL DE ALUERDOS

ENTEN

W. R. 1885/84

"vulnera, razón de ser de las obligaciones tributarias, que-  
"no es otra que la de imponer a los miembros de la Sociedad  
"la obligación de contribuir a los gastos públicos que el -  
"Estado requiere de realizar para lograr atender las necesi-  
"dades comunes de la misma colectividad, esto es, la obliga-  
"ción tributaria constituye una especie de contraprestación  
"a los servicios que el causante recibe del Estado, tomando  
"en consideración para determinarla los beneficios que ta-  
"les servicios le representa, colmándose con esto último -  
"el diverso principio de equidad que debe regir también la-  
"materia tributaria y que se ve infringido cuando el Estado  
"exige que las personas deben cubrir un impuesto sobre otro,  
"pues ante esta circunstancia es manifiesto que el pago del  
"primer impuesto no representa beneficio alguno al causante  
"y sí en cambio lo hace objeto de una desproporcionada car-  
"ga fiscal, lo que viene a repercutir en transgresión de la  
"proporcionalidad y equidad que la fracción IV del artículo  
"31 Constitucional señala como principios a respetarse en -  
"la instauración de las contribuciones que al gasto público  
"corresponde realizar a los gobernados, por lo que ante tal  
"vicio son de considerarse inconstitucionales también los -  
"actos de aplicación del artículo 18 de la Ley del Impues-  
"to al Valor Agregado. - - - - En atención a las conside-  
"raciones precedentes, corresponde otorgar a la parte quejo  
"sa el amparo y protección que solicita en contra de los ac-  
"tos que reclamó de las autoridades responsables, por lo -  
"que resulta innecesario entrar a analizar los demás alega-  
"tos de violación que expuso aquella parte".



A. R. 1885/84



Cuarto.- Incopformes con la resolución anterior el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como encargado del despacho a nombre del titular de la dependencia y en representación del presidente de la República; así como el apoderado de la Comisión Federal de Electricidad en representación de ésta, interpusieron recurso de revisión en su contra.

En acuerdo dictado el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco por el Presidente de este alto Tribunal se admitió únicamente el recurso presentado en representación del presidente de la República; mas no así los otros por improcedentes.

En el mismo auto se turnó el asunto para su estudio y resolución al señor ministro Ulises Schmill Ordóñez notificándose el acuerdo por lista el quince de enero de mil novecientos ochenta y seis.

El Ministerio Público federal de la adscripción solicitó se revoque el fallo recurrido y se sobresea o en su caso se niegue el juicio de garantías interpuesto.

El once de marzo y el tres de octubre de mil novecientos ochenta y seis la recurrente presentó promociones con el fin de interrumpir la caducidad de la instancia.

#### CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 11 fracción IV bis inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada por un juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio

A. R. 1885/84

de amparo en el que se plantea la inconstitucionalidad de una Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, concretamente en cuanto a su artículo trigésimo segundo transitorio, así como el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

SEGUNDO.- La autoridad recurrente, hace valer los siguientes agravios:

"PRIMERO.- Violación a los artículos 1º. fracción I, 2º, 73 fracción XVIII, 74 fracción III y 11 fracciones III y IV de la Ley de Amparo, 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 3º de la Ley de Control por parte del Gobierno Federal de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1970 así como a los artículos 7º, 8º, 9º, fracciones I y VIII, y 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1975, al declarar infundada la causal de improcedencia denunciada, desconocerse que el juicio de amparo sólo procede contra actos o leyes de autoridad y finalmente aceptar su procedencia respecto a actos de particulares. - - - - En los términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el amparo sólo cabe en contra de las leyes o actos de autoridad; en forma concorde, éste resulta improcedente cuando se promueve contra actos de particulares. - - - - En el caso concreto la quejosa reclama de la Comisión Federal de Electricidad, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro,



A. R. 1885/84

S. A. y de otras empresas, el traslado del impuesto que se le hacía; la propia sentencia en la descripción de los actos reclamados, se precisa como acto reclamado la traslación del impuesto casada en el artículo 32 transitorio de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, realizado por las empresas distribuidoras del fluido eléctrico. - - - - Es cierto que el cobro de los tributos implica ejercicio de soberanía, y esto lo lleva a cabo el fisco acreedor frente al contribuyente, a través de diversos actos administrativos, como acto jurídico concreto dirigido frente al gobernado y sobre esas bases podrá exigirse a los prestadores de energía eléctrica al pago del impuesto en cuestión. - - - - En el presente caso no existe acto concreto y específico de autoridad, encaminado a lograr la aplicación de esta Ley, situación desconocida por el juzgador. - - - - En el presente caso -- estamos en presencia de una relación contractual, de servicio público de energía eléctrica, prestado por particulares, organismos descentralizados y empresas de participación -- estatal, según el caso, con personalidad jurídica propia, patrimonio, régimen legal propio, etc., como se desprende de las normas invocadas de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de la Ley de Control de Organismos Descentralizados y empresas de participación estatal y la propia Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que configuran -- a la Comisión Federal de Electricidad como un Organismo Público Descentralizado y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A., en liquidación, como una empresa de participación estatal. En consecuencia, estando frente a la re-

A. R. 1885/84

"lización de actos comerciales, contractuales, realizados por  
"terceros, particulares, que no tienen el carácter de autori-  
"dad, procedía decretar el sobreseimiento de este juicio res-  
"pecto a todos ellos. - - - - Supletoriamente y en forma -  
"cautelar y sin que signifique aceptar la procedencia del am-  
"paro contra actos de particulares, debió sobreseerse el pre-  
"sente juicio respecto a los actos atribuidos a la Comisión -  
"Federal de Electricidad, Compañía de Luz y Fuerza de Pachu-  
"ca, S. A., Compañía Meridional de Fuerza, S.A., Compañía de  
"Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S.A., en tanto que no se -  
"aportó en autos ninguna prueba concreta respecto a la pres-  
"tación del servicio de energía eléctrica por parte de estas  
"empresas y el traslado del impuesto reclamado y al no resol-  
"verse así por el juzgador, resulta fundado el presente agra-  
"vio. - - - - SEGUNDO.- Violación a los artículos 22 frac-  
"ción I, 73, fracción XII y 74 fracción IV, de la Ley de Am-  
"paro así como el artículo 1º transitorio de la Ley que Esta-  
"blece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones --  
"Fiscales, de 31 de diciembre de 1982, al desestimarse la --  
"causal de improcedencia invocada por la autoridad y aceptar  
"como presentada oportunamente la demanda de amparo, lo cual  
"resulta inexacto, - - - - En efecto, la Ley reclamada, -  
"que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposi-  
"ciones Fiscales, entró en vigor el día 1º de enero de 1983,  
"tal como se establecía en su artículo 1º transitorio. En -  
"consecuencia, de la fecha de entrada en vigor debió iniciar  
"se el cómputo de 30 días para reclamarla como autoaplicati-  
"va y concluir que para la fecha en que se presentó la deman-  
"da ésta era extemporánea y por ende debió haberse sobreseído.





123

48/2281

A. R. 1885/84

"el presente juicio de amparo. - - - - Debe agregarse que -  
"no se encuentra probada en forma alguna la existencia de -  
"actos concretos de autoridad, tendientes a lograr la aplica-  
"ción de la Ley; ningún órgano hacendario ha intervenido en  
"el cobro de este impuesto, de donde se confirma que la de--  
"manda resulta improcedente y así debió declararse en la sen-  
"tencia que se recurre. - - - - TERCERA - Violación a los  
"artículos 42, 73 fracción V, 74 fracción III de la Ley de -  
"Amparo, 42 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción  
"y Servicios, así como a la tesis de jurisprudencia 109, vi-  
"sible a página 196 común al R. y a las Salas, de la Com-  
"pilación 1917-1975, al negarse a sobreseer el juicio de am-  
"paro por falta de interés jurídico de la quejosa, quien no  
"es contribuyente del Impuesto Especial Sobre Producción y -  
"Servicios en el campo de la energía eléctrica. - - - -  
"Resulta confusa la sentencia, cuando mezcla el interés ju-  
"rídico de la quejosa con el fondo del negocio así como con-  
"fundir la traslación del impuesto, con el interés jurídico  
"para reclamar en amparo la inconstitucionalidad de la Ley.-  
"En los términos del artículo 32 transitorio de -  
"la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas -  
"Disposiciones Fiscales, como acto reclamado, se establece -  
"claramente que el impuesto será a cargo del prestador del -  
"servicio de energía eléctrica, quien será el único legítima-  
"do para reclamar los alcances de la Ley y en su caso valo-  
"rar si efectivamente se afectan sus intereses jurídicos. --  
"En forma diversa en dicho precepto no se establece de nin-  
"guna manera que el impuesto sea a cargo del consumidor, tal  
"como incluso se reconoce en la demanda de amparo e incluso,

EX-  
TENTE

A. R. 1885/84

"de la sentencia, al señalar que es una obligación "personalí-  
"sima" de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro. --  
"- - - De lo anterior se desprende que la traslación del im-  
"puesto es un acto exclusivamente de particulares; no es un  
"acto de autoridad. - - - Debe agregarse que al estar -  
"gravada la producción, será el volumen total de ésta lo gra-  
"vable, en los términos de la Ley Fiscal Especial y por ende  
"Comisión Federal de Electricidad o las Compañías de Luz y  
"Fuerza, serán los sujetos que deban pagar este impuesto. --  
"- - - El pago que realizó la empresa quejosa a favor -  
"de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro, en los  
"términos de la copia certificada del recibo que exhibió co-  
"mo prueba, es el pago contractual del consumo en un período  
"determinado; es una contraprestación comercial al suminis-  
"tro del servicio de energía eléctrica que recibió, para evi-  
"tar la suspensión de este fluido, en los términos de los --  
"artículos 25, 26, fracción I, 33, 34 y 35 de la Ley del Ser-  
"vicio Público de Energía Eléctrica, lo que confirma que no  
"son actos de autoridad y la falta de interés jurídico de --  
"la empresa para reclamar en vía de amparo. - - - El in-  
"terés jurídico deviene de la ley, que tutela un derecho, y  
"no de un efecto económico derivado de relaciones comercia-  
"les, incluso de la traslación del impuesto. - - - Por -  
"lo anterior el traslado del impuesto se configura como el -  
"cobro o cargo que el contribuyente debe o puede hacer, a la  
"persona que adquiere los bienes y reciben servicios, por un  
"monto equivalente al impuesto establecido en la ley, y en -  
"el caso en cuestión se presenta como un efecto económico --  
"del impuesto que no altera la relación jurídica tributaria --



A. R. 1885/84

"entre el fisco y el contribuyente. - - - - - Por todo lo --  
"anterior se confirma que a la empresa quejosa aunque pudiera  
"tenerlo de carácter económico, le falta interés jurídico pa-  
"ra reclamar el artículo 32 transitorio de la Ley que Estable-  
"ce, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fisca-  
"les, y por ende, debió sobreseerse el presente juicio de am-  
"paro, resultando así fundado el presente agravio. - - - - -

"- - - - - CUARTO.- Violación a los artículos 31 fracción IV,  
"65, 71, 72, inciso f), 73 fracción VII de la Constitución Po-  
"lítica de los Estados Unidos Mexicanos, al desconocerse por-  
"el juzgador de amparo la facultad del Congreso de la Unión -  
"para establecer las contribuciones necesarias para cubrir el  
"presupuesto de egresos de la Federación, hacerlo en forma --  
"anual, ejercitando su competencia en el campo de los impues-  
"tos especiales. - - - - - Es la Constitución Política de --  
"los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 73, fracción  
"VII y 74 fracción IV, que establece el principio de la anua-  
"lidad en el pago de las contribuciones, para vincularlas y  
"destinarlas a la satisfacción del presupuesto de egresos, -  
"previamente aprobados por la Cámara de Diputados. En esta  
"forma el Congreso de la Unión expresa su voluntad sobre las  
"contribuciones que deberán recaudarse para cubrir el presu-  
"puesto del año fiscal siguiente, legitimando al Poder Ejecu-  
"tivo para cobrarlas y obligando a los gobernados a pagarlas.  
"- - - - - En ejercicio de estas facultades, el Congreso de  
"la Unión expide anualmente la Ley de Ingresos de la Federa-  
"ción, que establece el catálogo general de las contribucio-  
"nes que pueden cobrarse para el ejercicio inmediato siguien-  
"te; cada contribución por su parte está regulada en la ley-

A. R. 1885/84

"específica que la crea y en los demás ordenamientos fisca-  
 "les, y así no tendrán que discutirse y aprobarse cada año -  
 "el contenido íntegro de cada contribución, discutidas ya --  
 "con anterioridad. - - - - - El Congreso de la Unión en su  
 "período ordinario de sesiones de 1982, aprobó tanto el pre-  
 "supuesto de Egresos de la Federación para 1983, así como la  
 "Ley que Establece, Reforma Adiciona y Deroga Diversas Dis-  
 "posiciones Fiscales, que en su artículo 32 transitorio esta-  
 "blece que la prestación del servicio de energía quedar-  
 "gravada por un impuesto especial sobre Producción y Servi-  
 "cios. En la Ley de Ingresos para 1983 se estimó una recauda-  
 "ción del impuesto especial sobre producción y servicios de <sup>recauda</sup>  
 "345,183 millones de pesos, en donde se incluye el impuesto - <sup>SECRETARIA GEN</sup>  
 "especial a la prestación del servicio de energía eléctrica, -  
 "con lo cual se demuestra el ejercicio claro de una facultad  
 "constitucional por parte del Congreso de la Unión. - - - - -  
 "Además debe agregarse que la competencia del Congreso de la  
 "Unión para establecer el impuesto especial sobre la energía  
 "eléctrica consagrada en el artículo 73 fracción XXIX, ha --  
 "quedado perfectamente delimitada y ejercitada a través de  
 "la creación de este impuesto, en donde se cumplieron todas -  
 "las formalidades constitucionales del proceso legislativo y  
 "en donde a la vez el producto de la recaudación de este im-  
 "puesto se destinará a integrar el presupuesto de egresos de  
 "la Federación y su aplicación en la forma dispuesta en di-  
 "cha norma jurídica. - - - - - En conclusión al haberse ---  
 "ejercitado debidamente una facultad impositiva del Congreso  
 "en correlación de los ingresos y egresos, dentro de su ám-  
 "bito de competencia, y con pleno respeto al principio de le-





125

A. R. 1885/84

"galidad la sentencia que se recurre resulta contraria a de-  
"recho y debe de revocarse por el superior jerárquico al re-  
"sultar fundado el presente agravio. - - - - - QUINTO.- Vio  
"lación a lo dispuesto por el artículo 31 fracción IV, de la  
"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 59 -  
"del Código Fiscal de la Federación, 77 fracción II de la --  
"Ley de Amparo, 222 del Código Federal de Procedimientos Ci-  
"viles y 32 transitorio de la Ley que Establece, Reforma, --  
"Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales; al desco-  
"nocer que en la Ley reclamada se contienen los elementos --  
"formales de las contribuciones. - - - - - En la Ley recla-  
"mada se contienen todos los elementos técnicos de las con-  
"tribuciones, en la siguiente forma: - - - - - a).- El obje-  
"to del impuesto, lo constituye la prestación del servicio -  
"de energía eléctrica. - - - - - b).- El sujeto está perfec-  
"tamente identificado como los prestadores del servicio pú-  
"blico de energía eléctrica, lo que se confirma con la refe-  
"rencia en la exención de que el impuesto no será aplicable  
"a los servicios que se "prestan" a los usuarios, etc. - - -  
"- - - c).- La base del impuesto será el kilowatt-hora. - -  
"- - - d).- La tasa del impuesto será de un peso por cada -  
"unidad de medida de la base gravable. - - - - - e).- El -  
"tiempo de generación del impuesto será por ejercicio anual.  
"- - - - - f).- El pago del impuesto se hará a través de -  
"pagos provisionales que deberán realizarse periódicamente -  
"por los sujetos del impuesto. - - - - - g).- Finalmente se  
"establecen exenciones del impuesto a los servicios presta-  
"dos a usuarios domésticos con consumos mensuales menores -  
"de 50 Kw-Hora. - - - - - Con lo anterior se confirma que  
"el impuesto es aplicable a los prestadores de servicios pú-  
"blicos de energía eléctrica." - - - - -



A. R. 1885/84

"el principio de legalidad en materia de contribuciones se -  
 "ha cumplido cabalmente al describirse en ley los elementos  
 "esenciales del impuesto, a través de un acto formal y mate  
 "rialmente legislativo, independientemente que se trata de -  
 "un precepto transitorio de una ley. - - - - El carácter  
 "de transitorio de la Ley, está referido exclusivamente a --  
 "los límites temporales de la norma, ya que más allá del 31  
 "de diciembre de 1983 no podrá cobrarse el impuesto. -  
 "- - Además la naturaleza de un impuesto no depende de la  
 "ubicación metodológica de los artículos que lo plasman, en  
 "el contexto de una ley, por lo que resulta inexacto  
 "los transitorios pueden solamente contener cuadros  
 "gencia y disposiciones derivadas. - - - - El juez agre  
 "ga que se está cobrando el impuesto a la quejosa sin que -  
 "haya sido señalada dentro de los postulados de la ley mis  
 "ma lo cual carece de fundamento porque la quejosa no pres  
 "ta el servicio de energía eléctrica y por lo tanto, no es  
 "la contribuyente, sin que exista alguna disposición que --  
 "obligue a mencionar en lo individual a todas las personas  
 "a quienes económicamente se pueda trasladar la carga del -  
 "impuesto, además de que no es propio de la ley hacer men--  
 "ciones individuales de personas, pues si lo hicieran serían  
 "privativas. - - - - El juez agrega que no es legalmente  
 "posible que la Comisión Federal de Electricidad y la Compa  
 "ñía de Luz y Fuerza del Centro (en liquidación), pretendan  
 "cobrar y exigir el impuesto a la quejosa y que si lo hacen,  
 "cometen violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitu  
 "ción Federal, en tanto que se trata de una inexacta aplica  
 "ción de las disposiciones legales aplicables. Aquí se com



48/28

A. R. 1885/84

"ten varias violaciones: a) el argumento es oficioso; b) no  
"se indican los preceptos que se aplican inexactamente ni se  
"dice por qué; c) las personas morales que supuestamente co-  
"meten la violación son los contribuyentes del impuesto, es  
"decir, actúan como particulares gobernados y no como auto-  
"ridad, además de que al trasladar el impuesto <sup>A</sup> realizaron  
"algún acto de aplicación de la ley sino una mera posibili-  
"dad económica, atento que el traslado del impuesto sólo es  
"obligatorio tratándose de enajenación de bienes (artículo -  
"19 fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Produc-  
"ción y Servicios); d) la traslación del impuesto no causa -  
"agravio a la quejosa que no es consumidor final. - - - - -  
" Probablemente las violaciones se cometieron por falta de  
"comprensión o examen del impuesto reclamado. Los contribu-  
"yentes del mismo son las personas físicas o morales que la  
"quejosa no se le cobra el impuesto mediante algún acto de -  
"autoridad pues el fisco puede exigirlo únicamente de los -  
"contribuyentes; por esto quien paga el impuesto, es la Co-  
"misión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuer-  
"za del Centro, S. A. (en liquidación), efectuando pagos --  
"provisionales a más tardar el día 20 de cada mes y una de-  
"claración anual (artículo 59 de la Ley del Impuesto Espe-  
"cial sobre Producción y Servicios); el traslado del impues-  
"to a la quejosa no la convierte en contribuyente ni esta-  
"blece una relación jurídica entre el fisco y ella, porque -  
"es un simple fenómeno económico respecto del cual, es im-  
"procedente el juicio de amparo (particularmente debe tener  
"se en cuenta que la traslación en caso de prestación de --  
"servicios no es obligatoria); la quejosa a su vez repercute

DE JUSTICIA  
ACCIÓN  
DE AMPARO

A. R. 1885/84

"la carga financiera del impuesto que le fue trasladado en --  
 "los precios de venta de sus productos, aunque no lo haga en  
 "forma expresa, porque no se trató de un consumidor final. --  
 " El juez se desentendió de la ley, concedió indebidamente el  
 "amparo a la quejosa, quien no es contribuyente, y por lo --  
 "tanto no tiene interés jurídico directo, sin dar de ello --  
 "alguna explicación (por lo que su sentencia es infundada). --  
 " Probablemente se confundió por la circunstancia de que el  
 "impuesto se traslada a la quejosa, sin preocuparse de si  
 "esta traslación es definitiva, es decir, ni siquiera examinó  
 "el fenómeno económico de la repercusión en forma integral. --  
 "Si lo hubiera hecho, habría caído en la cuenta de que la --  
 "quejosa, a su vez, traslada el impuesto sobre los consumido  
 "res. La falta de estudio y fundamento de la sentencia cau-  
 "sa a las autoridades el agravio que se hace valer. - - - - -  
 " SEXTO.- Violación a los artículos 76, 77, 79, 80, de la -  
 "Ley de Amparo, 222 y 349 del Código Federal de Procedimien-  
 "tos Civiles, así como el artículo 32 transitorio de la Ley  
 "que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposi-  
 "ciones Fiscales al considerar inconstitucional la creación  
 "de un impuesto en un precepto transitorio de la ley, y no -  
 "quedar configurada en el texto principal de la Ley del Im-  
 "puesto Especial Sobre Producción y Servicios. - - - - - Se  
 "hace valer en primer lugar, que la sentencia no está fundam-  
 "da como ordenan los artículos 77 fracción II de la Ley de  
 "Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, -  
 "porque no cita, ni hay precepto constitucional que distinga  
 "entre un precepto transitorio y un precepto de ley pues --  
 "los artículos transitorios son preceptos de ley-, ni menos





A. R. 1885/84

"que establezca jerarquía entre ellos; tampoco expresa el --  
"juez algún razonamiento que justifique la inusitada distin-  
"ción que pretende establecer entre artículos de la misma --  
"ley según su ubicación ni explica cómo o por qué le parece  
"que los artículos transitorios no siguen el procedimiento --  
"legislativo previsto en el artículo 72 constitucional. --  
"Los preceptos transitorios son parte de la ley a que  
"pertenecen al igual que cualquier otro de sus artículos; su  
"validez formal es la misma y el procedimiento legislativo --  
"para establecerlo es idéntico, es más, se discuten, aprue-  
"ban y publican junto con el resto del ordenamiento al que --  
"pertenecen. El juez de Distrito violó el artículo 72 cons-  
"titucional al invocarlo para hacer distinciones donde dicho  
"precepto no distingue y al pretender, sin fundamento legal,  
"ni doctrinario, ni jurisprudencial, que los artículos tran-  
"sitorios son de jerarquía inferior a la ley y al afirmar --  
"de manera dogmática y arbitraria que existen materias cons-  
"titucionalmente vedadas a estos últimos. La Constitución --  
"no establece prohibiciones respecto de los artículos transi-  
"torios. -- -- -- Por razones de técnica legislativa las --  
"disposiciones de las leyes se clasifican en títulos, capítu-  
"los, secciones y artículos, cuya estructura y orden respon-  
"de a consideraciones prácticas y metodológicas; los precep-  
"tos se agrupan por temas y el orden numérico de los precep-  
"tos responde a la naturaleza de las instituciones o a otras  
"razones de técnica, gramaticales o de estilo, ajenas por com-  
"pleto a supuestas reglas constitucionales de jerarquía, --  
"pues nuestra Ley Fundamental únicamente establece las pre-  
"vistas en su artículo 131 y por lo tanto sin que la ubica-

DE JUSTI-  
CIA  
DE ACUERDOS

A. R. 1885/84

"ción de los diversos preceptos de la misma ley implique que  
 "algunos sean superiores a otros lo que algunos sean más ley  
 "que otros, pues eso no es jurídico ni lógico, ya que, se --  
 "repite, todos y cada uno de los preceptos de una ley siguen  
 "el mismo proceso legislativo y por lo tanto, tienen la mis-  
 "ma jerarquía formal; no podría decirse, por ejemplo que el  
 "artículo 39 fuera inferior al 29 o que los artículos de un  
 "capítulo fueran superiores a los de otro, como pretende el  
 "juez quien afirmó en su sentencia que los artículos transi-  
 "torios no deben rebasar a los otros artículos de la Ley y  
 "que la Ley sólo puede ser reformada por artículos de ella --  
 "misma, lo cual es injustificado y casi ininteligible. **SUPREMA CORTE DE LA NACIÓN SECRETARÍA GENERAL**  
 "La Constitución señala que las contribuciones **SUPREMA CORTE DE LA NACIÓN SECRETARÍA GENERAL**  
 "establecidas por ley, pero no señala en qué capítulos o en  
 "qué número de artículo, ni menos excluye del concepto ley a  
 "los preceptos transitorios, por lo que la sentencia es cla-  
 "ramente infundada; la legalidad de las contribuciones tiene  
 "el sentido de que las establezcan los representantes popu-  
 "lares en quienes se deposita el Poder Legislativo y que --  
 "sean generales, abstractas y permanentes, lo cual se ha cum-  
 "plido a la letra, sin que exista base para considerar in-  
 "constitucional un precepto proveniente del Congreso de la --  
 "Unión, abstracto y permanente, expedido siguiendo el proce-  
 "so legislativo previsto en la Constitución, con el expedien-  
 "te fácil e infundado de negarle el carácter de ley. - - - -  
 " El artículo 72 inciso f) de nuestra Ley Fundamental dis-  
 "pone que en la interpretación, reforma y derogación de las  
 "leyes o decretos se seguirán los mismos trámites estable-  
 "cidos para su formación, sin exigir que las leyes sean re-



A. R. 1885/84

"formadas o adicionadas sólo mediante ciertos artículos sino  
"por cualquier precepto que haya seguido el mismo proceso le-  
"gislativo. - - - - - Tampoco tiene razón el juez, ni funda-  
"su afirmación, de que los elementos del tributo deben estar  
"consignados expresamente en la ley no en preceptos transito-  
"rios, ya que éstos por su falta de vinculación con las nor-  
"mas Constitucionales y su sola función de adaptar los textos  
"a las situaciones creadas por las nuevas disposiciones, úni-  
"camente se vinculan con los elementos técnicos que le son --  
"propios a la nueva ley, por lo que al crear la obligación en  
"artículos transitorios se dejan márgenes excesivos a la ac-  
"tuación indiscriminada de la autoridad. - - - - - Ni hay --  
"tal reserva de la ley que excluya a los transitorios, ni la  
"función de los transitorios -- y menos la única --, consiste en  
"adaptar textos a situaciones nuevas; lo cual no tiene sen-  
"tido, pues esta es la función de cualquier reforma legal; --  
"menos aún los márgenes de actuación para la autoridad depen-  
"den de la ubicación de los artículos, por lo que la senten-  
"cia es infundada. - - - - - La razón técnica de que se haya  
"previsto en un precepto transitorio que el Impuesto Espe-  
"cial sobre Producción y Servicios gravará el servicio de ---  
"energía eléctrica es que el citado impuesto se establece úni-  
"camente para el año de 1983 y no en forma permanente. Al --  
"establecer dicho impuesto se cumplieron todos los requisitos  
"constitucionales y se siguió el proceso legislativo previsto  
"en la Ley Fundamental; el legislador decidió establecer el  
"impuesto durante un año y fue por ello mismo que lo hizo en  
"un precepto también transitorio. Al tener todos los precep-  
"tos de una ley, la misma jerarquía y validez formal, la deci-  
"sión, por lo tanto, es la misma en cualquier caso."

E. JUSTI-  
CIA  
ACUERDOS

A. R. 1885/84

"sión de ubicar una disposición en artículos transitorios de  
 "pende de consideraciones prácticas y, obviamente, para esta  
 "blecer un impuesto transitorio, lo lógico es un artículo  
 "transitorio, por lo que la sentencia recurrida es infundada  
 "y debe ser revocada. - - - - - SEPTIMO.- Violación a los  
 "artículos 14 y 16 y 31 fracción IV de la Constitución Polí-  
 "tica de los Estados Unidos Mexicanos, 77 fracciones I y II,  
 "78 y 80 de la Ley de Amparo, 222 del Código Federal de Pro-  
 "cedimientos Civiles, así como los artículos 19 y 18 de la  
 "Ley del Impuesto al Valor Agregado al estimarse indebidamen-  
 "te en la sentencia recurrida que al Impuesto al Valor Agra-  
 "gado le faltan los requisitos de proporcionalidad y equidad  
 "que establece la Constitución Política, en cuanto que la  
 "considera que forma parte de la base gravable de este im-  
 "puesto, el importe del Impuesto Especial Sobre Producción y  
 "Servicios, argumentos que violan los preceptos que se invo-  
 "can. - - - - - La sentencia es omisa al considerar que el  
 "artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado toma  
 "exclusivamente como base gravable el pago de los diferentes  
 "impuestos que hubieren sido cubiertos con motivo de las  
 "operaciones reguladas en dicha Ley. Esto es inexacto ya  
 "que la base del Impuesto al Valor Agregado se forma con  
 "la suma de los diferentes conceptos que pagará el benefi-  
 "ciario o usuario de un servicio, como son los siguientes:-  
 " - - - - - a).- La contraprestación pactada entre el pres-  
 "tador del servicio y el beneficiario o usuario del mismo.-  
 " - - - - - b).- Los viáticos que se hubieren pagado. - - - -  
 "- c).- Los gastos de toda clase como verificaciones, docu-  
 "mentos, comprobaciones, investigaciones, etc.; - - - - -

SUPREMA CORTE  
 SECRETARIA GENERAL





129

A. R. 1885/84

" d).- Reembolsos realizados. - - - - - e).- Los intereses -  
"pagados en función del tiempo, sean normales, moratorios, -  
"etc., o bien como penas convencionales. - - - - - f).- Los  
"derechos que se hubieren pagado, configurados estos como -  
"las contribuciones establecidas por el Poder Público; y --  
" - - - g).- Los impuestos pagados en función de las activi-  
"dades de los sujetos, volumen de las mismas, hecho genera--  
"dor, etc. - - - - - Por tanto, forman parte de la base gra-  
"vable del impuesto al valor agregado las diferentes cantida-  
"des que determinan el precio del servicio en el mercado y -  
"de ninguna manera se toma tan sólo en forma aislada el im-  
"puesto. - - - - - Debe considerarse que al incluir el im-  
"puesto trasladado como parte de la base gravable del impues-  
"to al valor agregado además del hecho económico, se regula  
"el acto jurídico de integración del precio a pagar por -  
"el usuario o beneficiario del servicio. - - - - - La super-  
"posición de gravámenes es parte de la técnica de las contri-  
"buciones, de medir una cierta base para el establecimiento  
"de otro tipo de contribuciones; constitucionalmente es vá-  
"lido el sistema, porque está en función del volumen de acti-  
"vidades de actos económicos, de actos jurídicos que se hu-  
"bieren realizado; es una forma de no repetir las operaciones  
"ya realizadas y que llevarán a la determinación y conoci-  
"miento de la primera contribución, lo importante desde el -  
"punto de vista de la proporcionalidad y equidad, es el mon-  
"to total del impuesto a pagar y su relación con la capacidad  
"contributiva y no cómo se integra dicho monto total. - - -  
"- - La equidad y proporcionalidad del impuesto al valor -  
"agregado, estipulada en el artículo 13 de esta ley, está -

DE JUSTICIA  
ACORDADO  
DE ACUERDO

ENCUENTRO

A. R. 1885/84

"en relación con el monto del ingreso obtenido por el contribuyente en sus actividades, en una proporción de 15% (quince por ciento), que es exactamente igual a la tasa de este impuesto." Cualquiera que sea el monto de las operaciones realizadas, existirá una cuota o tasa a pagar de manera proporcional, de donde no existe la transgresión a la norma constitucional que se invoca en la sentencia que se recurre.

" - - - - La sentencia que concede el amparo resulta incongruente al establecer que el impuesto exigible debe ser el adecuado a los ingresos de los causantes y sin embargo en el caso en estudio no se analizó si el impuesto tachado de inconstitucional era el adecuado y equitativo al monto de los ingresos de la quejosa y menos aún al olvidar que el carácter de empresa está obligada a trasladar a sus clientes el impuesto al valor agregado, lo que de ninguna manera puede afectar su capacidad contributiva. - - - - La consideración dogmática del juzgador en el sentido de que resultaba ilógico e inconstitucional establecer un impuesto sobre la base de otro impuesto, no cita ni se apoya en fundamento constitucional alguno; no precisa la norma constitucional que establezca esta prohibición. - - - - El Congreso de la Unión tiene facultad de establecer contribuciones y por lo tanto fijar el monto de las mismas; la fijación y modificación de dicho monto se puede efectuar a través de la base y mediante la cuota; el resultado aritmético de ambos procedimientos es igual: para aumentar un impuesto se puede aumentar la base o incrementar la cuota; esto es una cuestión de técnica legislativa, ajena a la equidad, a la cual importa el monto del impuesto resultante

ESTAMPADO: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SECRETARIA GENERAL DE LA NACIÓN



130

A. R. 1885/84

"y su relación con la capacidad contributiva. La existencia  
"de impuestos adicionales sobre otros impuestos ha sido des-  
"de siempre admitida por la doctrina, la legislación y la --  
"jurisprudencia, e inclusive existen impuestos que expresa--  
"mente llevan el nombre de adicionales. -- -- -- El Congre-  
"so de la Unión puede establecer una carga tributaria median-  
"te un sólo impuesto o mediante la combinación de dos o más --  
"impuestos; la equidad sólo se relaciona con el monto total --  
"de la carga. Para establecer una carga fiscal de, por ejem-  
"plo, 7.5, el legislador podría señalar una contribución de  
"7.5 o bien dos impuestos, uno de 4 y otro de 3.5, o bien un  
"impuesto de 5 y un adicional de 50% sobre el monto de este-  
"impuesto. En todos los casos el resultado es de 7.5. Des-  
"de el punto de vista de proporcionalidad y equidad interesa  
"ría únicamente que el monto del impuesto (7.5, en ejemplo)-  
"sea adecuado a la capacidad contributiva, pero no la forma  
"en que el Poder Legislativo haya decidido establecerlo, pues  
"esto es una cuestión ajena a los requisitos constituciona-  
"les, que responde a consideraciones de técnica legislativa.  
" -- -- -- Así lo ha resuelto la jurisprudencia de la Supre-  
"ma Corte de Justicia de la Nación, pudiendo citarse a mane-  
"ra de ejemplo la tesis 116, visible en la página 253 del --  
"Tomo correspondiente al Pleno de la Compilación 1917-1975.-  
" -- -- -- Por último, el contribuyente del Impuesto al Va-  
"lor Agregado por la prestación del servicio de energía eléc-  
"trica es la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía  
"de Luz y Fuerza del Centro (en liquidación), en los térmi-  
"nos del artículo 1º de la Ley del Impuesto al Valor Agrega-  
"do, por ser dichas personas morales quienes prestan el ser-

JUSTICIA  
ON  
CUEBOS

A. R. 1885/84

"vicio de energía eléctrica; la quejosa es también contribu-  
 "yente del impuesto al valor agregado, pero no por prestar -  
 "el servicio de energía eléctrica, sino por realizar los ac-  
 "tos o actividades previstos en el artículo 10. de la Ley --  
 "citada. - - - - En los términos del artículo 18 de la -  
 "Ley citada que fue reclamado por la quejosa, la base del --  
 "impuesto a cargo de las personas morales que prestan el ser-  
 "vicio de energía eléctrica comprende el valor total de la -  
 "contraprestación pactada, así como las cantidades que ade-  
 "más se cargan o cubren a quienes reciben el servicio por --  
 "otros impuestos, entre el que se encuentra el Impuesto Espe-  
 "cial Sobre Producción y Servicios; esta disposición afecta  
 "a quienes tienen el interés jurídico de reclamar; desde el  
 "punto de vista económico podrá afectar a quienes sufren la  
 "incidencia del impuesto en razón de ser consumidores fina-  
 "les que ya no pueden trasladar. - - - - No es lógica ni  
 "económicamente razonable considerar, como indebidamente lo  
 "hizo el Juez de Distrito, que el impuesto afecta a quien ni  
 "es el contribuyente del impuesto, ni sufre la incidencia --  
 "del mismo, sino una empresa intermediaria en el fenómeno de  
 "traslación del contribuyente al consumidor final; por lo -  
 "tanto es infundado aceptar que quien no tiene interés jurí-  
 "dico ni sufre agravio, puede impugnar el impuesto, por lo --  
 "que la sentencia recurrida resolvió sobre una demanda im-  
 "procedente. También, en cuanto al fondo, es infundada la  
 "sentencia porque el juez distorsionó el sentido de los --  
 "preceptos que invocó para apoyar sus opiniones personales,  
 "pues ninguno de dichos preceptos apoya las consideraciones  
 "del Juez que niegan a los artículos transitorios el carác-

SUPREMA CORTE  
 DE LA N  
 SECRETARIA GENERAL





"ter de ley. - - - - - Tampoco tiene fundamento la conce-  
"sión del amparo por supuesta falta de equidad, porque la -  
"quejosa no demostró que el impuesto que reclama es exorbi-  
"tante y ruinoso para su economía, pues ni siquiera hizo -  
"alguna consideración sobre la capacidad contributiva de és-  
"ta y menos analiza el impacto financiero del impuesto re-  
"clamado en la economía de la quejosa, pues ésta no rindió  
"pruebas al respecto ni demostró que el impuesto fuera exor-  
"bitante y ruinoso, según estaba obligada conforme a la te-  
"sis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  
"publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sépti-  
"ma Época, Primera Parte, Volumen 52, página 54."

DE JUSTICIA  
ACION  
DE ACUERDOS

TERCERO.- Por razón de método se analizarán --  
preferentemente los agravios primero, segundo y tercero en -  
los que se alega la improcedencia del juicio, ya que de re-  
sultar fundado alguno de ellos haría innecesario el estudio -  
de los restantes.

Sostiene la autoridad recurrente que el juicio de  
amparo resulta improcedente cuando se promueve contra actos  
de particulares y que en el presente caso no existe un acto  
concreto y específico de autoridad encaminada a lograr la -  
aplicación de la ley reclamada, sino que más bien se impug-  
na un acto dictado dentro de una relación contractual entre  
la quejosa y un organismo público descentralizado, el cual -  
no tiene el carácter de autoridad conforme a las leyes que -  
regulan su constitución.

Se alega también que al menos debió sobreseerse -  
en el juicio respecto de la Comisión Federal de Electrici-  
dad señalada como responsable, porque en autos la parte --

A. R. 1885/84

quejosa no aportó alguna prueba para acreditar que dicho organismo le traslada o repercute el impuesto previsto en el artículo trigésimo segundo transitorio reclamado.

Añade que, además de lo anterior, la demanda resulta extemporánea porque el artículo trigésimo segundo transitorio de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Disposiciones Fiscales, no se impugnó dentro de los treinta días siguientes contados a partir de que entró en vigor; además de que tampoco pudo reclamarse dicha ley con motivo de un acto concreto de aplicación en virtud de que en autos no se encuentra probada la existencia de actos concretos de autoridad tendientes a lograr la aplicación del precepto legal controvertido.

Continúa diciendo la recurrente que ~~debe~~ <sup>SUPLENTE DEL</sup> ~~seer~~ <sup>DE LA N</sup> ~~seer~~ <sup>SECRETARÍA GENERAL</sup> en el presente juicio de garantías, con en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, porque el artículo trigésimo segundo transitorio reclamado prevé un impuesto a cargo del prestador del servicio de suministro de energía eléctrica, quien por tal motivo es el único legitimado para impugnar aquel precepto, sin que pueda considerarse que la traslación o repercusión de tal gravamen al consumidor afecte los intereses jurídicos de este último, pues se trata de actos que si bien le ocasionan un perjuicio económico no por ello lo convierten en contribuyente del impuesto reclamado, el cual como se dijo, se estableció a cargo de las empresas prestadoras del servicio de suministro de energía eléctrica.

Los argumentos antes sintetizados son jurídicamente ineficaces para sobreseer en el juicio como se explicará a continuación.



A. R. 1885/84

Ante todo debe señalarse que la parte quejosa aportó en el cuaderno de amparo a fojas diecisiete, recibo de pago de suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, en los que aparece que cubrió, además del importe de dicho servicio, el impuesto previsto en el artículo trigésimo segundo transitorio reclamado, así como el impuesto al valor agregado correspondiente; lo cual pone de manifiesto que es infundado el agravio en el sentido de que la parte quejosa ni siquiera demostró en autos que se le hubiesen trasladado o repercutido los impuestos reclamados.

Ahora bien, respecto de los demás agravios debe decirse que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de juicios de amparo contra leyes se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción; el relativo a las leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas, considerando que respecto de las primeras el juicio de amparo se debe interponer dentro de los treinta días siguientes al en que entren en vigor, o bien, dentro de los quince días siguientes al primer acto de aplicación, y en contra de las segundas la demanda debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que se dé el acto de aplicación o al en que se resuelva el recurso interpuesto en contra de dicho acto, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, este Tribunal Pleno estima procedente señalar que la referencia hecha por el artículo 73, fracción VI, de la Ley invocada, en cuanto a la necesidad de que el acto de aplicación de las leyes que por su sola expedición no causan perjuicio al quejoso provenga, precisa

DE JUSTICIA  
ACCIÓN  
DE ACUERDOS

A. R. 1885/84

mente de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación de la ley no debe necesariamente y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular o de una entidad de la administración paraestatal que actúa por mandato expreso de la ley. En estos casos el particular o la entidad paraestatal debe considerarse como auxiliar de la administración pública. Dentro de nuestra legislación positiva pueden citarse múltiples ejemplos: la retención del impuesto sobre la renta al sueldo del trabajador que hace el empresario y su posterior entero a las autoridades hacendarias; y, muchos de los impuestos llamados indirectos que son, por naturaleza, esencialmente repercutibles.

Basta pues, en términos generales, que el acto de aplicación se produzca y cause perjuicio al gobierno, para que éste se encuentre en posibilidad de intentar el juicio de amparo como medio de control constitucional, sin que sea necesario llamar como responsable al particular o entidad paraestatal que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede contra actos de particulares. En resumen, el que se tenga como acto de aplicación el que ejecuta un particular o una entidad paraestatal es sólo para efectos de la procedencia del juicio contra la ley impugnada aunque tal aplicación no provenga de una autoridad; sostener lo contrario, implicaría que en esos casos no pudiera promoverse el juicio de amparo a pesar de que se dió el acto de aplicación de la ley, sino que tuviera que esperarse en el caso de incumplimiento del obligado, a que la autoridad, por medio de procedimientos coercitivos, tratara de





133

A. R. 1885/84

obtener el cumplimiento forzoso del acto basado en la ley, con todas las molestias y perjuicios inherentes a ello. En consecuencia, sólo para efectos de la procedencia del amparo contra la ley, se atenderá a la fecha de aplicación de ésta cuando corresponda efectuarla a particulares, sin que sea necesario llamarlos a juicio como autoridades.

El mismo criterio fue sustentado por el Tribunal Pleno al resolver, entre otros, los siguientes amparos en revisión:

8993/83, promovido por Unión Regional de Crédito Ganadero de Durango, sociedad anónima, de capital variable, fallado en sesión de diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, por unanimidad de dieciséis votos de los señores ministros: López Aparicio, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, de Silva Nava, Rodríguez Roldán, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Salmorán de Tamayo, Moreno Flores, del Río Rodríguez, Olivera Toro y presidente Iñárritu.

524/84 y 239/83, promovidos por Planta Pasteurizadora Durango, sociedad anónima de capital variable y Triplay y Maderas del Norte, sociedad anónima, fallados en sesión del veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, por unanimidad de dieciséis votos de los señores ministros: López Aparicio, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, de Silva Nava, Rodríguez Roldán, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Salmorán de Tamayo, Moreno Flores, del Río Rodríguez, Olivera Toro y presidente Iñárritu.

A. R. 1885/84

Expuesto lo anterior debe considerarse infundado el agravio formulado en el sentido de que el juicio es improcedente por haberse señalado como autoridad aplicadora de la ley reclamada a un particular, es decir, a la Comisión Federal de Electricidad, toda vez, que, como se ha visto, basta con que la parte quejosa haya demostrado que dicho organismo le ha trasladado los gravámenes previstos en las disposiciones legales controvertidas para estimar, por ese sólo hecho, que tales preceptos se aplicaron en su perjuicio para los efectos del juicio de amparo.

Como consecuencia de lo anterior también es infundado el agravio donde se argumenta que la demanda es extemporánea por no haberse promovido el juicio dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que entró en vigor el artículo trigésimo segundo transitorio de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, pues si la parte quejosa optó por reclamar dicho precepto con motivo de un acto concreto de aplicación no estaba obligada a promover el juicio en el plazo que señala la recurrente, sino dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento de la ejecución del citado precepto en su perjuicio, lo cual aconteció, contrariamente a lo que se alega en el agravio, cuando la Comisión Federal de Electricidad repercutió al quejoso el impuesto que prevé el artículo trigésimo segundo transitorio reclamado.

En el restante agravio se plantea la improcedencia del juicio, en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, porque, según la recurrente, el impuesto previsto en el artículo trigésimo segundo transitorio recla



A. R. 1885/84

mado constituye un gravamen a cargo del prestador del servicio de suministro de energía eléctrica, quien por tal motivo es el único legitimado para impugnar aquel precepto.

Es igualmente infundado el anterior argumento pues si bien es cierto que el impuesto especial sobre producción y servicios consistente en un peso por kilowatt-hora de suministro de energía eléctrica se cubre inicialmente por los prestadores de ese servicio, también es verdad que dicho pago es provisional, pues conforme a los artículos 1o., último párrafo y 4o., de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en relación con el artículo trigésimo-segundo transitorio de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos en el Diario Oficial de la Federación, ese impuesto debe ser trasladado a los usuarios, quienes, en última instancia soportan la carga impositiva.

Los artículos invocados a continuación se transcriben en su parte conducente:

Artículo 1o.- Están obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, las personas físicas y las morales que realicen los actos o actividades siguientes".

"I.- . . . .

"II.- . . . .

"III.- . . . .

"La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, los organismos descentralizados o cualquier otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos el dicho impuesto sea trasladado a los usuarios.

La ley de esta materia es la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

DE ACUERDO  
CON  
EL ACUERDO

A. R. 1885/84

"tos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos,  
"deberán aceptar la traslación del impuesto especial sobre -  
"producción y servicios y, en su caso, pagarlo y trasladarlo,  
"de acuerdo con los preceptos de esta ley".

"Artículo 4o.- . . . ."

" . . . . ."

"Para que sea acreditable el impuesto especial so  
"bre producción y servicios, deberán reunirse los siguien--  
"tes requisitos:"

"I.- . . . ."

"II.- . . . ."

"III.- Que el impuesto haya sido trasladado  
"presamente al contribuyente y conste por separado en docu-  
"mentación que satisfaga los requisitos que establece el Co-  
"digo Fiscal de la Federación".

SE  
SUPREMA C  
DE LA  
SECRETARIA GEN

"Se entenderá por traslado del impuesto el cobro  
"o cargo que el contribuyente deba efectuar de un monto - -  
"equivalente al impuesto establecido en esta ley. . ."

" . . . . ."

"Artículo trigésimo segundo.- Durante el año de  
"1983 la prestación del servicio de energía eléctrica que--  
"dará gravada con el impuesto especial sobre producción y -  
"servicios con una cuota de \$1.00 por cada kilowatt-hora. -  
" Quienes proporcionen el servicio calcularán el impuesto -  
"por ejercicio, efectuarán pagos provisionales y tendrán --  
"las demás obligaciones que la Ley del Impuesto Especial so  
"bre Producción y Servicios les impone. Lo dispuesto en es  
"te artículo no será aplicable a los servicios que se pres-  
"ten a los usuarios domésticos con un consumo mensual hasta  
"de 50 kilowatt-hora".





A. R. 1885/84

De lo transcrito se advierte que los preceptos impugnados sí afectan los intereses jurídicos de la parte quejosa, ya que el impuesto previsto en la disposición legal transitoria antes transcrita se repercute expresamente y es, en última instancia el consumidor quien debe cubrirlo, motivo por el cual no puede estimarse que se surte la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73 fracción V, de la Ley de Amparo.

CUARTO.- En congruencia con las argumentaciones sustentadas en el anterior considerando debe sobreseerse en el juicio respecto de la Comisión Federal de Electricidad señalada como responsable, con fundamento en los artículos 73 fracción XVIII y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo en relación con la jurisprudencia número setenta y cinco, visible en la página ciento veintidós de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, que es del tenor siguiente:

"AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.--

"El término "autoridades" para los efectos del amparo comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen".

Esta determinación obedece a que si bien el amparo es procedente contra el acto de aplicación de las leyes reclamadas emitido por dicho organismo, ello no significa que deba llamársele a juicio, pues aunque en este caso tenga el carácter de auxiliar de la administración pública, no por ello tiene el carácter de autoridad.

A. R. 1885/84

Así pues, resulta incorrecto que el Juez de Distrito haya concedido el amparo respecto de la Comisión Federal de Electricidad, debiendo revocarse en este punto la sentencia recurrida y sobreseerse en el juicio por lo que a dicho organismo se refiere.

QUINTO.- Es esencialmente fundado el sexto agravio en el que la recurrente combate la concesión del amparo respecto del artículo trigésimo segundo transitorio de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos.

En efecto, el juez de Distrito decidió otorgar la protección constitucional contra dicha disposición porque en su concepto, el impuesto que contempla no se encuentra establecido en algún ordenamiento que conforme a la legislación fiscal nacional "sea apto para encuadrarlo", pues tratándose de una ley especial, como la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, es en este ordenamiento donde deberá establecerse y no en el precepto reclamado que por su naturaleza transitoria no puede tener más alcance que el de regular las bases para adecuar un ordenamiento legal de nueva creación a la materia pretérita o futura con que se relacione.

Por su parte la recurrente sostiene que el artículo 72 de la Constitución Federal dispone que en la interpretación, reforma y derogación de las leyes o decretos se seguirán los mismos trámites establecidos para su formación, sin exigir que las leyes sean reformadas o adiciona-



das sólo mediante ciertos artículos sino por cualquier precepto que haya seguido el mismo proceso legislativo; también aduce que no hay precepto constitucional que distinga entre un artículo transitorio y un precepto de ley, ni menos que establezca jerarquía entre ellos, además de que la Constitución Federal dispone que las contribuciones deben ser establecidas por ley pero sin señalar en qué capítulos o en qué número de artículo, ni excluya del concepto ley a los preceptos transitorios.

Ahora bien, son fundados los anteriores agravios en virtud de que la circunstancia de que el legislador haya expedido la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales e incluido en ella adiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y que, por otra parte, no se haya reformado específicamente esta última ley, no implica que se haya violado el artículo 72, inciso f), de la Constitución Federal, pues dicho precepto al establecer que: "en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación" se refiere a que deben observarse todos y cada uno de los pasos a que aluden los incisos precedentes, pero no prohíbe que dichas reformas o derogaciones se realicen al aprobarse un conjunto de disposiciones legales de diversos ordenamientos que por su naturaleza guarden estrecha conexión. Resulta aplicable, por analogía la tesis relacionada que puede consultarse en la página ciento sesenta y seis de la Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que dice:

A. R. 1885/84

"LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACION. PUEDEN DEROGAR LEYES FISCALES ESPECIALES.- Es inadmisibile el argumento en el sentido de que las Leyes de Ingresos de la Federacion no pueden modificar las leyes fiscales especiales, ya que por una parte, si bien es verdad que tales ordenamientos tambien contienen otras disposiciones de caracter general que tienen por objeto coordinar la recaudacion de las contribuciones, y por otra parte dichas leyes de ingresos poseen la misma jerarquia normativa que los ordenamientos fiscales de caracter especial y, por tanto, pueden modificarlas y derogarlas en determinados aspectos que se consideran necesarios para una mejor recaudacion impositiva".

En tal virtud, si de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales <sup>SUPREMA CORTE DE</sup> ~~se advierte~~ <sup>SECRETARIA GENERAL</sup> se advierte que existe un capitulo especifico que se refiere a la Ley del Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios y en los transitorios se contiene una disposicion en la que expresamente se alude a un impuesto especial sobre el consumo de energia electrica, debe concluirse que si se observó lo dispuesto en el inciso f) del articulo 72 de la Constitucion; sin que, por otra parte, esté demostrado que no se hayan cumplido todos y cada uno de los pasos a que aluden los incisos del a) al e) del propio articulo constitucional.

Por otra parte, en el parrafo final del articulo 17 de la Ley del Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios se hace referencia a que el impuesto sobre servicios se cobrará en los casos en que no se trate de seguros o de servicios telefonicos en el momento en que sean exigibles las contraprestaciones a favor de quien los presta y sobre el





137

A. R. 1885/84

monto de cada uno de ellos, y en el artículo trigésimo segundo transitorio de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales se incluyó como objeto del impuesto sobre producción y servicios el consumo de energía eléctrica; por tanto, no puede estimarse que no esté especificado en la Ley dicho servicio como objeto del impuesto o que el artículo transitorio sobrepase la Ley. En efecto, los artículos transitorios en ocasiones sirven para precisar el alcance de la ley con la cual se relacionen, ya sea mediante la fijación del período de su vigencia o la determinación de los casos en los cuales será aplicada, de tal forma, que si la propia ley que específicamente fija el impuesto señala que existen otros casos en los cuales aquél puede cobrarse sobre los servicios que se presten y el artículo transitorio combatido establece como uno de ellos el consumo de energía eléctrica, tal artículo no está en modo alguno -- sobrepasando la ley, en todo caso, como dicha disposición -- forma parte integrante del ordenamiento legal, no podría ir más allá de la propia ley. Además, se insiste en que la violación al artículo 72, inciso f), de la Constitución sólo -- podría darse si no se cumplieran los requisitos, pasos o trámites, a que aluden los incisos del a) al e) del propio artículo; es decir, que no se observara el trámite para la -- iniciativa, discusión y aprobación de la ley; de manera que si no está acreditado que al aprobarse la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales se dejaron de observar esos trámites, tampoco puede estimarse que los artículos transitorios adolezcan de ese vicio, pues como ya se dijo, forman parte integrante de la ley.

A. R. 1885/84

Podría, pues, en todo caso, constituir un defecto de técnica legislativa incluir en los artículos transitorios un impuesto específico, pero ello no determina la inconstitucionalidad de la ley.

Es estas condiciones siendo fundados los agravios estudiados en este considerando, a continuación con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, -- procede examinar los conceptos de violación segundo, séptimo y octavo en los que también se plantea la inconstitucionalidad del artículo trigésimo segundo transitorio reclamado, cuyo análisis fue omitido por el juez de Distrito.

SEXTO.- En el segundo concepto de violación la parte quejosa aduce que el impuesto previsto en el artículo trigésimo segundo transitorio de la Ley que Establece la forma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales es inconstitucional porque este ordenamiento no está contemplado dentro de la Ley de Ingresos de la Federación para el -- ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y tres.

Ahora bien, al respecto debe decirse que es inexacto que a los particulares sólo pueda exigírseles contribuciones que se encuentren fijadas en la Ley de Ingresos de la Federación, pues el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, no establece que sea forzosamente en esa ley en la que deban fijarse en los tributos que han de recaudarse durante un año determinado, sino que hace referencia a que las contribuciones deben fijarse en lo "...que dispongan las leyes...". Es necesario tomar en cuenta que, de acuerdo con nuestro sistema legal, anualmente debe el -- Congreso decretar las contribuciones necesarias para cubrir



el presupuesto del año fiscal siguiente. La forma en que normalmente se decretan tales contribuciones (impuestos, derechos o contribuciones especiales) es haciendo en la Ley de Ingresos respectiva una simple enumeración de los diversos tributos que deben cubrirse durante el año, sin especificar, salvo casos excepcionales, ni cuotas ni formas de constitución del crédito fiscal y sólo estableciendo que las contribuciones enumeradas se causarán y recaudarán conforme a las leyes en vigor.

Lo que sucede, en la realidad, es que el Congreso de la Unión se vale de un procedimiento práctico para evitar se la tarea de volver a discutir y aprobar toda la legislación fiscal que ha regido en años anteriores y que debe seguir rigiendo en un año determinado.

Pero si, como en el caso, el mismo Congreso considera necesario decretar otro gravamen para cubrir las necesidades previstas en el presupuesto de egresos, no es indispensable que se prevea en la Ley de Ingresos; Constitucionalmente basta con que esté en una ley expedida por el Congreso de la Unión, salvo los casos limitativamente señalados en el artículo 131 de la Carta Magna.

Por ello, no existe inconveniente constitucional alguno para decretar una contribución (impuesto, derecho o contribución especial) que deba recaudarse en un año determinado aún sin estar enumerada en la Ley de Ingresos de ese año. No hay precepto constitucional que se refiera a una "Ley de Ingresos", la Constitución Federal sólo se refiere a que los mexicanos están obligados a contribuir a los gastos públicos en la forma proporcional y equitativa que seña

A. R. 1885/84

lan las leyes (en plural), por lo cual ello puede hacerse en uno o varios ordenamientos.

En consecuencia, si el artículo trigésimo segundo transitorio combatido forma parte de una ley expedida por el Congreso de la Unión, no puede estimarse contrario al precepto constitucional invocado por el hecho de que no esté previsto el gravamen en la Ley de Ingresos.

En el séptimo concepto de violación la parte quejosa argumenta que el impuesto que prevé el artículo trigésimo segundo transitorio reclamado viola la fracción IV del artículo 31 constitucional, porque junto con lo que se le cobra por concepto de impuesto al valor agregado, tiene que pagar por el importe de ambos gravámenes una cantidad superior a lo que tuvo que cubrir por el consumo de energía eléctrica; además de que si se comparara el importe cubierto por el período anterior, se advierte que el monto de los impuestos -- que ahora se pretenden cobrar, se elevan en mucho más de un cien por ciento.

También es infundado el anterior argumento toda vez que la circunstancia de que el impuesto reclamado sea superior en un cien por ciento a la cantidad que se cobró en años anteriores por concepto de consumo de energía eléctrica no demuestra que se esté en presencia de un impuesto desproporcionado e inequitativo, ya que un tributo puede superar en mucho a las cantidades cubiertas en ocasiones anteriores por determinados conceptos (ingresos, predio, servicios, etcétera) sin incurrir por ese sólo hecho en una violación del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Es aplicable el criterio sustentado por este Tri-





A. R. 1885/84

buñal Pleno al resolver, entre otros, los siguientes amparos en revisión:

3896/83, promovido por Camba, sociedad anónima de capital variable y coagraviados, fallado en la sesión del siete de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, por unanimidad de diecinueve votos de los señores ministros: López Aparicio, Franco Rodríguez, Castellanos Tena, Azuela Guitrón, Langle Martínez, Díaz Infante, Pavón Vasconcelos, de Silva Nava, Rodríguez Roldán, Palacios Vargas, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Salmorán de Tamayo, Moreno Flores, del Río Rodríguez, Calleja García, León Orantes, Olivera Toro y presidente Iñárritu.

8952/83 y 8953/83, promovido por María Cristina Valladares de Quintero fallados en la sesión del doce de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, por unanimidad de dieciséis votos de los señores ministros: López Aparicio, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Guitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, de Silva Nava, Rodríguez Roldán, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Salmorán de Tamayo, Moreno Flores, del Río Rodríguez, Olivera Toro y presidente Iñárritu.

En estos asuntos se dijo lo siguiente: "...el que un impuesto sea elevado, incluso considerablemente, de un año a otro, no significa necesariamente que se incurra en violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución, pues dependerá del análisis de todos los factores que influyeron en la determinación el que se concluye en uno o en otro sentido, y, dependiendo de esto, de lo argumentado en los conceptos de violación e incluso de las pruebas aportadas."

A. R. 1885/84

Finalmente, el octavo concepto de violación donde se argumenta que se delegan en la Comisión Federal de Electricidad facultades para cobrar los impuestos a que se refiere este amparo, "... porque siendo como es, tal organismo no reúne las características de autoridad y le delegan, la liquidación, previa cuantificación de los impuestos que se reclaman. . .", es infundado. En efecto, es inexacto que dicho organismo esté liquidando o reteniendo impuestos, lo que sucede en realidad es que como prestador del servicio de energía eléctrica, es causante del impuesto sobre producción y servicios consistente en un peso por cada kilowatt-hora de ese servicio y, conforme a los artículos 1o., último párrafo y 4o., de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y servicios y el artículo trigésimo segundo transitorio de la Ley, constituyen una obligación trasladar ese impuesto a los usuarios, y que por ese hecho, no puede estimarse que esté actuando como autoridad, ya que únicamente está acatando la ley y, conservando su carácter de contribuyente, debe hacer el pago correspondiente del impuesto de que se trata, ya sea que lo traslade cumpliendo su obligación, o que no lo traslade incumpliendo dicha obligación, pero en uno y otro caso, no se le delegan facultades que corresponden a la autoridad.

Es por lo anterior que el octavo concepto de violación resulta infundado pues no existe base para sostener que se hayan delegado facultades exclusivas de la autoridad, a la Comisión Federal de Electricidad.

Así pues, habiendo resultado fundados los agravios expresados en la revisión en contra de la concesión del amparo respecto del artículo trigésimo segundo transitorio recla



A. R. 1885/84

mado, e infundados los correspondientes conceptos de violación cuyo estudio omitió el Juez de Distrito, debe negarse la protección federal por lo que a dicho artículo se refiere.

SEPTIMO.- A continuación se analizan los agravios formulados por la autoridad recurrente dirigidos a combatir la concesión del amparo contra el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

En el séptimo de los agravios se sostiene, a fin de demostrar que el juicio es improcedente, que el precepto antes mencionado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa ya que ésta no es contribuyente del impuesto que prevé dicha disposición, sino solamente una intermediaria en el fenómeno de traslación del contribuyente al consumidor final.

Ahora bien, el artículo 10. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en la fecha de emisión del acto reclamado, establece lo siguiente:

"ARTICULO 10.- Están obligados al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley, las personas físicas, las morales o las unidades económicas que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

"I.- Enajenen bienes".

"II.- Presten servicios independientes".

"III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes".

"IV.- Importen bienes o servicios".

"El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 15%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores".

A. R. 1885/84

"El contribuyente trasladará dicho impuesto, en --  
"forma expresa y por separado, a las personas que adquieran --  
"los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban los ser-  
"vicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o --  
"cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de --  
"un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley".

"El contribuyente pagará en las oficinas autoriza-  
"das la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le --  
"hubieren trasladado, o el que él hubiese pagado en la impor-  
"tación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables  
"en los términos de esta ley".

De lo transcrito se advierte que si bien es cierto  
que la parte quejosa no causa el impuesto al valor agregado  
como prestadora del servicio de energía eléctrica, también lo  
es que el artículo 18 de la ley invocada sí afecta su interés  
jurídico, ya que por disposición expresa de ese ordenamiento  
debe repercutirse el impuesto a quien reciba el servicio, lo  
cual determina que el consumidor sea el obligado, en última -  
instancia, a cubrir el importe del gravamen.

Por tanto, como de autos se advierte que es al -  
quejoso a quien se cobra, como beneficiario del servicio de  
energía eléctrica, el importe del impuesto al valor agregado  
(foja 17 del cuaderno de amparo), sin que tenga posibilidad -  
alguna de trasladarlo, debe concluirse que sí tiene interés  
jurídico para promover el amparo y que, por ello, no se ac-  
tualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artí-  
culo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.

OCTAVO.- En cambio, es esencialmente fundado el -





FORMA A-54  
141

A. R. 1885/84

diverso agravio en el que se aduce que el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no es contrario a la fracción IV del artículo 31 constitucional por lo siguiente:

→ De conformidad con el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado están obligadas al pago de este -- gravamen las personas físicas o morales que en el territorio nacional realicen alguna de las siguientes actividades; enajenación de bienes; prestación de servicios independientes; concesión del uso o goce temporal de bienes; y por último, la importación de bienes y servicios. Este mismo precepto dispone que "el impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 15% (este porcentaje tiene algunas excepciones).

Por lo que ve a la enajenación de bienes el artículo 12 de la citada ley establece que para la aplicación del impuesto se considerará como valor, el precio pactado así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto.

En cuanto a la prestación de servicios el artículo 18 cuestionado en el presente asunto señala que se considerará como valor el total de la contraprestación pactada, así -- como las cantidades que se carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto.

Finalmente los artículos 23 y 27 de la propia ley reclamada contienen normas análogas a las anteriores, con la salvedad de que se refieren al impuesto al valor agregado que

A. R. 1885/84

deba pagarse para otorgar el uso o goce temporal de bienes y por la importación de mercancías, respectivamente; en ambos casos la ley dispone que se considerarán como parte del valor sobre el cual se aplicará la tasa del gravamen, las cantidades que se hubiesen pagado por concepto de otros impuestos. En el caso de la importación de bienes, la ley concretamente alude a que la tasa se aplicará tomando en cuenta la cantidad que se hubiese pagado por concepto del impuesto general de importación.

Pues bien, del análisis relacionado de los anteriores preceptos se advierte que el impuesto al valor agregado tiene como hechos imponibles la enajenación de bienes, la prestación de servicios, la concesión del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes y servicios; es decir, estos son los actos que dan origen a la obligación jurídica tributaria contenida en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y constituyen asimismo el objeto del impuesto.

Estos actos o actividades son, por tanto, las que actualizan las distintas hipótesis normativas previstas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sin la realización de ellos no puede concebirse la debida aplicación de este ordenamiento, toda vez que son, por definición de la propia ley, las actividades que originan la obligación a cargo del contribuyente de pagar el referido gravamen.

Consecuentemente, no puede considerarse que el impuesto al valor agregado grava el cumplimiento de otras obligaciones tributarias u otras actividades distintas a las contempladas en el artículo 1o. citado en primer término, pues si el legislador señaló que en la base del gravamen también se



142

A. R. 1885/84

incluiría la cantidad pagada por otros impuestos, fue con el propósito de que la tasa prevista en la ley se aplique tomando en cuenta las condiciones objetivas en que el sujeto pasivo del tributo enajena los bienes o presta los servicios materia de la imposición en favor de las personas a quienes se les traslada o repercute el impuesto.

En efecto, no se desvirtúa la naturaleza del impuesto al valor agregado y menos aún se viola la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, porque el artículo 18 cuestionado haya establecido la posibilidad legal de que la tasa de este tributo se aplique también sobre las cantidades que hubiese pagado el causante por otros impuestos. Lo que sucede es que estos últimos solamente constituyen uno más de los múltiples factores que determinan el precio total de una mercancía a la contraprestación que debe otorgarse por recibir un servicio, razón por la cual se hace necesaria su inclusión en la base del impuesto discutido, que al gravar el consumo de bienes y servicios tiene que hacerlo de manera tal que la tasa se aplique sobre un valor que refleje las condiciones reales en que se adquieren los productos o se contratan los servicios; tanto es así, que el artículo 18 reclamado y sus correlativos: 12, 23 y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como al principio de este considerando se dijo, estatuyen: "que se hubieren pagado por viáticos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto"; gastos, todos ellos, que no constituyen el objeto del impuesto y sí en cambio los diversos elementos que integran su base.

Es pertinente puntualizar que no debe confundirse

A. R. 1885/84

al objeto de un impuesto con su base, pues por esta último debe entenderse la cosa o cantidad determinada en medida, número, peso, etcétera, sobre la que la ley fija una tasa o tarifa que se aplica a aquélla para obtener el monto del impuesto que debe pagarse.

Lo anterior significa entonces que asiste la razón a la autoridad recurrente cuando afirma que el artículo 18 de la Ley del impuesto al valor agregado, que es el que interesa en el presente asunto, grava exclusivamente la prestación de servicios y no el pago de otros impuestos, en virtud de que no es este pago el acto que da origen a la obligación de enterar al fisco aquel gravamen, sino la circunstancia de que el contribuyente haya realizado alguna de las actividades que por disposición de la propia ley deben considerarse como prestación de servicios.

SECRETARIA GENERAL

Dicho de otra manera, el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no grava el pago de otros impuestos, sino que sólo integra a su base una cantidad equivalente de lo que el sujeto pasivo pagó por concepto de otras obligaciones tributarias que tiene a su cargo, cuya cuantía únicamente va a ser tomada por la ley como una referencia de carácter económico para la fijación de la base.

Pero más aún, el juez de Distrito calificó el gravamen previsto en el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado como un "impuesto sobre otro impuesto"; esto es, que en su concepto el pago de un impuesto es considerado por dicha ley como el presupuesto objetivo de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria; sin embargo, aquella calificación solamente podría ser correcta si el pre-





143

A. R. 1885/84

citado artículo 18 señalara como objeto de causación, el pago de un impuesto, lo cual, en la especie, no acontece en la medida que la inclusión en este numeral de la frase "así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros impuestos", quiere decir únicamente que dentro de la base del impuesto al valor agregado relativo a la prestación de servicios se tomará en cuenta una cantidad equivalente a la que se cargue al receptor del servicio por otros impuestos, cantidad que no es objeto de causación del impuesto de que se trata.

Por último, si en el caso concreto se considerara que el impuesto previsto en el artículo trigésimo segundo -- transitorio de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos en el Diario Oficial de la Federación, forma parte del objeto del impuesto al valor agregado y no de la base de éste, entonces, en congruencia con lo anterior, también tendría que considerarse -- que forman parte del objeto de este gravamen los derechos, -- viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios y las penas convencionales, a que se refiere el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo cual, no es lógico ni jurídico, en virtud de que tal interpretación estaría en abierta contradicción con el artículo 10. -- la ley mencionada, precepto legal que bajo cuatro rubros específicos señala que el objeto a gravar por la ley es la enajenación de bienes y servicios; y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

Todas estas consideraciones ponen de relieve que

A. R. 1885/84

los gastos antes mencionados, así como las cantidades que se carguen o cobren al receptor del servicio equivalentes a -- otros impuestos, sólo constituyen los elementos que integran la base del impuesto al valor agregado, pero de ninguna manera su objeto.

En estas condiciones debe concluirse que el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no señala como objeto de causación el pago de otros impuestos y que, por ende, tampoco viola la fracción IV del artículo 31 de la -- Constitución federal.

Habiendo resultado fundado el agravio que se analiza y no existiendo algún otro concepto de violación omitido por el a quo en cuanto al precepto de mérito, debe también negarse el amparo y protección de la justicia federal, <sup>SECRETARÍA DE LA</sup> respecto al artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, <sup>SECRETARÍA DE LA</sup> sus actos de aplicación.

Este Tribunal Pleno sustentó los mismos argumentos en cuanto a la constitucionalidad del artículo trigésimo segundo transitorio reclamado, al resolver los siguientes asuntos:

Amparo en revisión 8993/83, promovido por Unión -- Regional de Crédito Ganadero de Durango, sociedad anónima, de capital variable, fallado en sesión de diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, por unanimidad de dieciséis votos de los señores ministros: López Aparicio, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Gutiérrez, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, de Silva Nava, Rodríguez Roldán, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Salmorán de -- Tamayo, Moreno Flores, del Río Rodríguez, Olivera Toro y presidente Iñárritu.



A. R. 1885/84

Amparos en revisión 3524/84 y 239/84, promovido por Planta Pasteurizadora Durango, sociedad anónima de capital variable y Triplay y Maderas del Norte, sociedad anónima, fallados en sesión del veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, por unanimidad de dieciséis votos de los señores ministros: López Aparicio, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, de Silva Nava, Rodríguez Roldán, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Salazar de Tamayo, Moreno Flores, del Río Rodríguez, Olivera Toro y presidente Iñárritu.

Amparo en revisión 3622/83, promovido por Importadora y Exportadora de Mármol, sociedad anónima, fallado en sesión del veintitrés de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, por unanimidad de diecinueve votos de los señores ministros: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Castañón León, Díaz Infante, Fernández Doblado, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa, Morenc, Moreno Flores, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Olivera Toro y presidente del Río Rodríguez.

Amparo en revisión 6390/83, promovido por Industrias de Refrigeración Plafer, sociedad anónima y 688/84, promovido por Rodolfo Ruiz Terrazas, fallados en sesión del treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y seis por unanimidad de dieciséis votos de los señores ministros; de Silva Nava, Azuela Güitrón, Castañón León, Díaz Infante, Fernández Doblado, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa -

A. R. 1885/84

Lozano, Moreno Flores, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Olivera Toro y presidente en funciones Cuevas Mantecón.

Por lo que toca a la constitucionalidad del artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, este Tribunal Pleno falló en el mismo sentido en los siguientes asuntos:

Amparo en revisión 9622/83, promovido por Importadora y Exportadora de Mármol, sociedad anónima en sesión del veintitrés de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, por mayoría de once votos de los señores ministros: de Silva Nava, López Contreras, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Villagordoá Lozano, Schmill Ordóñez, Díaz Romero y Olivera Toro en contra de los votos de los señores ministros: Cuevas Mantecón, Castañón León, Díaz Infante, Fernández Doblado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Moreno Flores y presidente del Río.

Amparos en revisión 6390/83 promovido por Industrias Plafer, sociedad anónima y 688/84, promovido por Rodolfo Ruíz Terrazas resueltos en sesión del treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y seis por mayoría de diez votos de los señores ministros: de Silva Nava, Rodríguez Roldán, Azuela Güitrón, Fernández Doblado, Adato Green, Martínez Delgado, Villagordoá Lozano, Schmill Ordóñez, Díaz Romero y Olivera Toro en contra de los votos de los señores ministros: Castañón León, Díaz Infante, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Moreno Flores y presidente en funciones Cuevas Mantecón.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:





A. R. 1885/84

PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Se sobresee en el presente juicio de garantías respecto de la Comisión Federal de Electricidad.

TERCERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a DARIO GONZALEZ CORONA; en contra de los actos que reclama del Congreso de la Unión, del presidente de la República, de los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, consistentes en la expedición, promulgación, -- refrendo, publicación y aplicación del artículo trigésimo -- segundo transitorio de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos y del artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad archívese el tomo.

Así, resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de diecinueve votos en cuanto a la revocación de la sentencia recurrida, al sobreseimiento del juicio respecto de la Comisión Federal de Electricidad y a la negativa del amparo al quejoso respecto del artículo trigésimo segundo transitorio de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, de los señores ministros: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Guitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores,

A. R. 1885/84

Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Olivera Toro y presidente del Río.

En lo que toca a la negativa del amparo respecto del artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, - por mayoría de catorce votos de los señores ministros: de Silva Nava, López Contreras, Castellanos Tena, Azuela Gutiérrez, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Villagordoa Lozano, - - - Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Olivera Toro y presidente del Río, en contra de los votos de los señores ministros Cuevas Mantecón, Díaz Infante, Gutiérrez de Velasco, González Martínez y Moreno Flores, quienes lo emitieron por la conservación de la protección federal en cuanto al señalado artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

SUPREMA CO  
DE LA  
SECRETARIA GENI

El señor ministro Leopoldino Ortiz Santos no emitió su voto en este asunto por estar impedido para conocer del mismo.

El señor ministro Noé Castañón León no votó por no haber asistido a la sesión previo aviso a la Presidencia.

Firman los CC. presidente, ministro ponente con el secretario General de Acuerdos.- Doy fe.

P R E S I D E N T E

  
LIC. CARLOS DEL RIO RODRIGUEZ



A. R. 1885/84


P O N E N T E

  
MTRO. ULISES SCHMILL ORDÓÑEZSECRETARIO GENERAL  
DE ACUERDOS  
LIC. JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ.

SE  
13 MAYO 1987  
notificó la resolución anterior a los interesados y al-  
Ministerio Público Federal. Conste.



Esta hoja corresponde a la sentencia del amparo en revisión  
1885/84, promovido por Dario González Corona.- CONSTE.





SUPREMA CON:  
DE LA  
SECRETARIA GENE.